Complementa respuestas al Segundo Informe Periódico presentado por Chile sobre la aplicación de la Convención Internacional de Naciones Unidas relativa a la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, el año 2019 dando respuesta a la lista de cuestiones previas formuladas por su Comité (CMW/C/CHL/QPR/2) en abril de 2018.

Sección I

A. Información general

Párrafo 2

Párrafo 2) a) y b)

Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Congreso Nacional aprobó la Nueva Ley de Migración y Extranjería, la que entrará en vigencia una vez que se dicte el Decreto que la reglamente, el que deberá ser publicado dentro del plazo máximo de un año contado, desde su promulgación.

Respecto de los derechos humanos contemplados en la Convención, éstos se encuentran incorporados al ordenamiento jurídico nacional, por aplicación del artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, que establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta constitución, así como los Tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Sobre la Nueva Ley de Migraciones, deben exponerse algunos de los principios que fundan la misma, y que se refieren a la protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales de los extranjeros que se encuentren en el país, los que van en absoluta concordancia con las disposiciones de la Convención, especialmente su derecho a la libre circulación, igualdad ante la ley, no discriminación, derecho a la salud, educación, vivienda, debido proceso, reunificación familiar y seguridad social, interés superior del niño, no criminalización de la migración irregular, entre otros.

Igualmente, la declaración de principios efectuada por el Estado chileno a través de la Nueva Ley de Migración y Extranjería, en términos de valorar la migración como un aporte al desarrollo de la sociedad chilena, para lo cual se compromete a promover la integración e inclusión de la población migrante en el país, fomentando la interculturalidad.

Un aspecto importante de avance de la nueva Ley es que incorpora en su texto de forma expresa los principios fundamentales de protección de los trabajadores migratorios y sus familiares, en el artículo 3°, diferenciándose en ese sentido del Decreto Ley N°1.094 de 1975.

La nueva normativa adecúa el ordenamiento jurídico interno a los preceptos de la Convención, ya que realiza un reconocimiento expreso de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, en el Título II párrafo II y establece los principios Fundamentales de Protección en su párrafo I, además de la creación de una nueva institucionalidad migratoria, destinada a velar por la protección y fomento de dichos derechos y garantías. Por otro lado, la NLM, señala que la Política Nacional de Migración y Extranjería, debe tener en consideración el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante consagrados en la Constitución Política de la República, en las leyes y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, independiente de su situación migratoria, con especial preocupación por grupos vulnerables como los NNA, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores; la integración e inclusión de los migrantes y el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante, entre otros.

Sobre las causales de prohibición de ingreso, la nueva ley de migraciones establece nuevas causales imperativas y facultativas de impedimento de entrada al país, las que se explicitan con mayor claridad y de manera objetiva; además del establecimiento de un procedimiento administrativo para la aplicación de dicha medida que da la oportunidad al extranjero de conocer por escrito el motivo de la denegación de ingreso, así como un sistema recursivo disponible para el afectado por esta medida.

Cabe agregar que, en la nueva normativa, las prohibiciones de ingreso, no tienen el carácter indefinido como en la actualidad, sino que deben ser decretadas por un tiempo determinado dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Con respecto al acceso a la seguridad social, la nueva ley, en su artículo 16 estableció que, para el caso de las prestaciones de seguridad social y acceso a beneficios de cargo fiscal, los extranjeros podrán acceder a ellos en igualdad de condiciones que los nacionales. Sólo establece una excepción respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas, respecto de las cuales no se establezcan, en forma directa o indirecta, requisito de acceso que involucren una permanencia mínima en el país, en las que se exige para su obtención, que el extranjero sea residente en calidad de titular o dependiente, y que haya permanecido en Chile en tal calidad por un período mínimo de 24 meses. Sin embargo, dicho precepto establece una contra excepción, en su inciso tercero, en el que se puede omitir el plazo de 24 meses cuando concurren razones humanitarias fundadas o alertas sanitarias decretadas en conformidad con el artículo 36 del Código Sanitario. Además, en su inciso final señala que, las restricciones contenidas en este artículo no se aplican a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren al cuidado de sus padres, guardador, los que tendrán acceso a dichas prestaciones desde su ingreso al país, cualquiera sea su situación migratoria de los adultos que los acompañen.

**Párrafo 2) c) viii**) **Si prevé medidas para garantizar el derecho a un debido proceso en los procedimientos de expulsión y las medidas para prohibir la expulsión colectiva;**

En este párrafo es importante señalar que, en el artículo 21 de la nueva ley de migraciones, el Estado garantiza a todo extranjero la igual protección de los derechos establecidos en la Constitución Política, la ley y los Tratados Internacionales sobre derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, asegurando un procedimiento racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en dicha ley, y otorgando medios de asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos.

En el caso de la aplicación de una medida de expulsión, garantiza la aplicación del debido proceso y la prohibición de expulsiones colectivas.

Así el art.130, señala que los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de expulsiones colectivas, debiéndose analizar y resolver cada caso en forma individual.

DEBIDO PROCESO

1. De conformidad con el artículo 129 establece que, la autoridad, previo a decretar una medida de expulsión, debe tomar en consideración las siguientes circunstancias a) gravedad de la infracción cometida, b) los antecedentes delictuales de la persona, c) la reiteración de infracciones migratorias, d) el período de residencia regular en el país, e) el arraigo familiar, f) el interés superior del niño, y g) las contribuciones de diversa índole que el extranjero hubiere aportado al país.
2. Debe ser fundada
3. En el caso que, al afectado, no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91 (rechazo o revocación del permiso de residencia), antes de la dictación de la medida de expulsión, deberá ser notificado de la misma, y tendrá un plazo de diez días para designar un representante en defensa de sus derechos laborales y previsionales, y para presentar sus descargos respecto de la causal invocada.
4. De acuerdo al artículo 148, la expulsión siempre debe ser notificada personalmente por Policía, la que deberá entregarle una copia íntegra de la resolución e informarle al afectado sus derechos y obligaciones, los recursos que le asisten, la autoridad ante quien deducirlos, los plazos con que cuenta para ello, y la ubicación y horario de atención de la Corporación de asistencia judicial, que le corresponda por si requiere asistencia gratuita.

Deberá dejarse registro de este acto por escrito, bajo la firma del afectado y del funcionario que la realizó, indicando, fecha, hora y lugar en que se practicó.

1. Procedencia de recursos judiciales y administrativos en contra de la medida de expulsión.
2. Recurso judicial de reclamación el que puede interponerse por el propio afectado o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, en el plazo de 10 días corridos, (actualmente son 24 horas) contados desde la notificación de la resolución recurrida, recurso que debe fallarse de manera preferente, debiendo resolverse por los Tribunales de Justicia dentro de tercero día. Su interposición suspende los efectos de la expulsión.
3. Recursos de protección y amparo establecidos en la Constitución Política de la República.

Además de la expulsión, la nueva ley migratoria contempla la figura de la reconducción o devolución que se da en 2 casos y que no requiere la dictación de una nueva resolución.

1.- Cuando el extranjero, ingrese al país, encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión, prohibición de ingreso o abandono del país. Respecto de esta medida, es importante señalar que la misma no implica la imposición de una nueva sanción migratoria, sino exclusivamente el cumplimiento de otra anterior, que ha sido válidamente emitida y notificada al afectado, y que éste, sin embargo, ha incumplido al tratar de ingresar al país;

2.- El extranjero que sea sorprendido intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

Las medidas señaladas en este artículo serán recurribles desde el exterior ante el Servicio, en el plazo de 15 días a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.

Igualmente, se debe hacer presente que el extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser oído por la autoridad contralora previo a la ejecución de la medida, a ser informado del procedimiento al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete.

También se debe hacer énfasis en que no se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley N°20.430.

Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los fundamentos de la medida aplicada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente, de conformidad al artículo 34.

**Párrafo 2) c) ix) Si prevé las debidas garantías procesales, incluido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el marco de los procedimientos de migración;**

El artículo 5 de la Nueva Ley de Migración y Extranjería establece que, es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz, acerca de sus derechos y deberes, así como de los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país. Así también, señala que el Estado, deberá disponer de mecanismos accesibles de reclamo para el extranjero afectado por falta de información. En cualquier procedimiento migratorio, el extranjero afectado por la acción de la autoridad, gozará de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y se arbitrarán los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quien no pueda procurárselos por sí mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política.

Por otro lado el artículo 21 contempla el derecho de los migrantes al debido proceso, señalando que el estado les asegurará igual protección de los derechos establecidos en la ley, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, debiendo asegurar un procedimiento e investigación racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en la ley, asegurando la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, debiendo además arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos.

**Párrafo 3). Sírvanse proporcionar información sobre las políticas y estrategias dirigidas a la protección de los trabajadores migratorios y de sus familiares adoptadas en el Estado parte, incluyendo información sobre sus cronogramas de implementación, objetivos medibles y metas que permitan vigilar el progreso alcanzado en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. En particular, informen sobre los recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la implementación de los compromisos sectoriales frente a los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares en el Plan nacional de derechos Humanos (2017)**

En el marco del reforzamiento de la institucionalidad nacional en materia de derechos humanos, en el año 2017, comenzó sus funciones la Subsecretaría de Derechos Humanos (Ley N° 20.885), del Ministerio de Justicia, cuya misión es contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas. Dentro de las funciones institucionales se encuentra el elaborar y coordinar la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

El Plan Nacional, aprobado en mayo de 2019 por el Comité Interministerial de Derechos Humanos, está compuesto por más de 600 acciones, organizadas en 50 metas y 15 capítulos, las cuales reflejan el compromiso del Estado con la promoción y fomento de la protección de los derechos humanos en el país. Estas acciones responden a las recomendaciones realizadas al Estado de Chile por el Sistema Universal de Derechos Humanos, y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y corresponden a acciones comprometidas por Servicios, Ministerios y organismos autónomos del Estado. El Plan Nacional contiene compromisos contraídos por 23 de los 24 ministerios, así como servicios relacionados y tres organismos autónomos; los cuales definieron las acciones a realizar, el presupuesto asociado a cada acción, el plazo de ejecución, e indicadores para evaluar su cumplimiento, entre otras materias. Al mes de noviembre de 2020, fecha del último reporte, el Plan cuenta con un 21,55% de sus actividades finalizadas, 8,72% no iniciadas, y 62,17% en implementación

Respecto de la participación de la sociedad civil en la elaboración del plan, se desarrolló un proceso participativo, que contó con: i) 15 Encuentros regionales en las capitales de todas las regiones vigentes a la fecha, con organizaciones de la sociedad civil que desarrollan sus funciones en torno a los temas abordados por el Plan; ii) Una consulta digital abierta a la participación de toda la población; y iii) Una jornada indígena, con representantes de pueblos indígenas de todo el país. En todas estas instancias, las y los participantes seleccionaron las recomendaciones realizadas al Estado de Chile prioritarias de ser abordadas en el PNDH.

Es menester señalar que el Plan, dentro de sus capítulos, contempla uno dedicado a personas migrantes y refugiadas, cuyo objetivo es respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en condiciones de igualdad y no discriminación, incorporando 74 acciones a monitorear. Otro capítulo relativo a trata de personas y tráfico de migrantes, contiene 16 acciones destinadas a erradicar la trata y tráfico de migrantes, velando por la aplicación efectiva del marco jurídico acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.

Para finalizar, durante el año 2021, se está llevando a cabo el proceso de elaboración del segundo PNDH 2022-2025, el que igualmente incluirá los capítulos sobre personas migrantes y refugiadas, y otro relativo a trata de personas y tráfico de migrantes. Este proceso igualmente contará con la participación de la sociedad civil, por medio de una modalidad digital abierta a todo público, así como encuentros temáticos, con pueblos indígenas, participación de niños, niñas y adolescentes, y participación de los Consejos de la Sociedad Civil de las instituciones públicas participantes, en formato digital, en consideración a las actuales circunstancias sanitarias que no permiten realizar actividades de carácter presencial.

En materia de refugio, se propuso como meta Fortalecer el asilo de calidad y la integración local de solicitantes de la condición de refugiado. En este señalar que, en el marco de una cooperación y coordinación regional para alcanzar progresivamente sistemas de asilo armonizados a nivel regional, el ACNUR facilitó un programa conocido con el “Asilo de Calidad” o QAI para sus siglas en inglés. La QAI se inspira en el Plan de Acción de Brasil, que fue adoptado por aclamación por 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe en diciembre de 2014, y que promueve el programa “Asilo de Calidad”.

Es en este contexto, y acogiendo el llamado de la comunidad internacional, es que en el año 2015 el Estado de Chile dio inicio formal a este programa de la QAI, contando para ello con el apoyo financiero y técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El objetivo fundamental de esta iniciativa es apoyar la mejora continua de los procedimientos de asilo, fundándose en la aplicación plena e inclusiva de la Convención de 1951 y de los principios del debido proceso consagrados por instrumentos y jurisprudencia en derechos humanos a nivel internacional y regional.

A la fecha, nuestro país concluyó la totalidad de las etapas que conforman este programa, centrándose en mejorar los procedimientos de elegibilidad; fortaleciendo la capacidad y el conocimiento de las autoridades de asilo, como asimismo introduciendo conceptos eficientes de gestión y manejo de los procedimientos, implementándose de manera paulatina las recomendaciones propuestas por la QAI.

También se ha participado en las Mesas Regionales convocadas por ACNUR, para el seguimiento de esta iniciativa y se ha dado cuenta de su implementación en el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con 10 acciones del Plan Nacional de Derechos Humanos asociadas al eje migrantes y refugiados, de las cuales 9 se encuentran en implementación y 1 ya fue finalizada.

Las acciones implementadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aportan al cumplimiento de las siguientes metas:

Meta 2: Promover la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas.

* Meta 3: Implementar políticas, planes y programas que aseguren el acceso de personas migrantes a prestaciones sociales

**Cuadro N°1: Acciones del Plan Nacional de Derechos Humanos en materia migrantes y refugiados, implementadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo:**

| **Meta** | **Acción** | **Estado** | **Avance reportado último ciclo – noviembre 2020** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Difundir las adecuaciones implementadas que eliminan barreras de acceso a subsidios habitacionales a personas extranjeras | En implementación | El año 2020 fueron atendidas 23.253 personas extranjeras residentes en el país a través de algunos de los canales establecidos por el Sistema de Atención al ciudadano del Minvu  Además, se generaron tres podcasts sobre la postulación a los programas habitacionales D.S.49 y D.S.1. En ellos se entrega información relevante para las personas extranjeras interesadas en postular a los llamados de subsidios habitacionales. Los podcast se encuentran publicados en el siguiente vínculo: https://www.minvu.cl/podcast-minvu/. |
| Elaborar publicaciones y material de difusión relativos a la temática migratoria, en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Organización Internacional para las Migraciones. | En implementación | Convenio Minvu - OIM firmado el año 2018 (Resolución Exenta N°1589). Para su implementación, se formuló un Plan de Trabajo que considera 4 ejes de colaboración inter institucional: 1. Capacitación y formación; 2. Acompañamiento técnico; 3. Intervención directa; 4. Publicaciones y difusión. El Convenio tiene una duración inicial de 3 años, con renovación automática, de común acuerdo entre las partes. Para el año 2021 se está definiendo un nuevo Plan de trabajo. |
| Realizar levantamiento de buenas prácticas en materia de inclusión y participación de la población migrante. | En implementación | 1. Las buenas prácticas sectoriales identificadas en materia de inclusión y participación de la población migrante corresponden a: Proyecto "En la Miramar la diversidad es bella", Antofagasta; Proyecto "Primeros Juegos Interculturales", comuna Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.  2. Las medidas implementadas en el contexto de la Agenda de Inclusión 2019- 2020 -2021.  3. Durante el año 2021 se realizará el concurso de buenas prácticas, cuyos resultados serán sistematizados. |
| Sensibilizar a funcionarios y funcionarias que atienden público, en materia de atención a personas migrantes | En implementación | Durante el año 2019 se capacitaron a más de 300 funcionarios y funcionarias MINVU a nivel país.  Durante el año 2020 se realizaron 2 talleres virtuales en conjunto con OIM, en el cual participaron funcionarios y funcionarias OIRS y equipos de inclusión social de todas las regiones:   * 30 de octubre: Taller "Migración y Nuevo Contexto". * 27 de noviembre: Taller: "Un enfoque inclusivo y de derechos humanos para la integración de los migrantes a los barrios". |
| Elaborar un protocolo de atención de población migrante que no habla español | En implementación | Se cuenta con un documento preliminar para la atención de público de nacionalidad extranjera. |
| 3 | Facilitar el acceso a la población extranjera a viviendas en arriendo | En implementación | Datos período 2014 - 2020.  2014: 27 postulaciones de personas extranjeras beneficiados respecto de 27 postulantes.  2015: 57 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 67 postulantes.  2016: 485 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 550 postulantes.  2017: 463 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 590 postulantes.  2018: 725 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 1409 postulantes.  2019: 1001 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 1209 postulantes.  2020: 1.105 postulaciones de personas extranjeras beneficiadas respecto de 1.944 postulantes. |
| Generar conocimiento interinstitucional en materia migratoria, para el diseño de la política habitacional y urbana | Finalizada con cumplimiento Total | Durante el año 2018 se realizó el Estudio "Identificación de brechas en el acceso al Programa Subsidio de Arriendo por parte de población migrante", en desarrollo por parte de la Dirección de Estudios Sociales de la UC (DESUC) y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) - Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 2019 se realizó 1 Taller interno para difundir los resultados y recomendaciones; También ese mismo año se realizó un seminario. |
| Desarrollar Planes de Acompañamiento, Social en los programas habitacionales, que fomenten la interculturalidad | En implementación | Se cuenta con la Sistematización del Taller sobre Plan de Acompañamiento Social y Población Migrante realizado en el MINVU el 30-06-2019, elaborada por el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio.  Se cuenta con un Informe de Evaluación con propuestas de implementación del Plan de Acompañamiento Social, pertinente a las características de este grupo.  Durante el año 2020 y considerando el contexto COVID- 19, no fue posible avanzar en el desarrollo del Planes de Acompañamiento Social que fomenten la interculturalidad. |
| Incorporar el enfoque intercultural en planes de intervención de campamentos vigentes con población migrante | En implementación | Debido a las condiciones sanitarias, se ha dificultado el trabajo en terreno en los campamentos en general y por lo tanto en los campamentos con mayor población migrante. Por lo anterior, al último reporte del Plan Nacional de DDHH, no se habían realizado acciones específicas para la población migrante. Sin embargo, es posible informar que se desarrolló una Guía de Enfoque Intercultural y se concluyó la asistencia técnica con la Subsecretaría de DDHH, que permitirá definir orientaciones para implementar el enfoque en campamentos, entre los que se incluye el enfoque de interculturalidad y orientaciones específicas para el trabajo con familias migrantes. |
| Diseñar proyectos de recuperación de los terrenos en los cuales se emplazaban campamentos | En implementación | Se avanzó en la elaboración de un Manual de Procedimiento (Orientaciones Técnicas) que incorpora el componente interculturalidad, pero aún se encuentra pendiente el inicio de proyectos de recuperación que incorporen este enfoque. |

Fuente: Reporte Plan Nacional de Derechos Humanos- ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En el contexto el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de menores (SENAME), comprometió como una de las acciones, reformular la Circular Nº 10 que define el procedimiento relativo al ingreso de niños y niñas extranjeros a la Red de atención del servicio. Dicha circular fue reemplazada por el Oficio Circular N° 4, de 02 de marzo de 2018, que “Informa política y procedimiento sobre la Gestión de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes vulnerados en sus derechos, extranjeros o chilenos que se encuentren en el exterior o deban ser reunificados con familiares en el extranjero, y deja sin efecto circular N°10, de 2010, de la Dirección Nacional del SENAME”.

Asimismo, actualmente se encuentra comprometido en el tema “Personas Migrantes y Refugiadas”, meta N° 3 “Implementar políticas, planes y programas.”, acción ID:248, la realización de un Taller sobre “La atención de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) Migrantes”, por el Servicio Nacional de Menores, a través de la Unidad de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, dependiente del Departamento de Protección de Derechos, en coordinación con el Departamento de Justicia Juvenil de SENAME, y otros organismos del Estado. Estos talleres se encuentran destinados a profesionales y funcionarios de la red de atención SENAME, tanto del área de Protección de Derechos como de Justicia Juvenil, que desempeñen sus funciones en aquellos Centros y Programas administrados directamente por SENAME o por Organismos Colaboradores Acreditados. Estos talleres tienen por objetivo contribuir al ejercicio de derechos de los niñas, niños y adolescentes migrantes ingresados a Centros y Programas del área de Protección de Derechos y de los adolescentes que se encuentran en Programas que ejecutan medidas y sanciones de responsabilidad penal adolescente.

La atención que realizan los diferentes programas tanto en modalidad ambulatoria como residencial comprende el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a salud, educación, y regularización de su situación migratoria.

Las capacitaciones se realizaron en forma presencial durante los dos primeros años, sin embargo, durante el año 2020, por la situación sanitaria del país, se efectuó en modalidad Telemática, en donde participaron los equipos de los proyectos regionales que solicitaban la capacitación, considerando principalmente la planificación y priorización planteada por los equipos técnicos y la Unidad de Casos de NNA Migrantes del SENAME. Entre el año 2018 a 2020 se realizaron entre 4 a 7 talleres anuales con un promedio de asistencia anual de 380 personas entre técnicos y profesionales de intervención directa con las familias migrantes y sus hijos o menores a cargo.

Párrafo 4) . Sírvanse proporcionar información detallada sobre el Departamento de Extranjería y Migración, el Consejo de Política Migratoria y el Consejo Técnico de Política Migratoria, en particular sobre sus recursos humanos, técnicos y financieros, así como sus atribuciones y los mecanismos de vigilancia y de seguimiento para implementar la Convención. Informen en qué medida la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y el Consejo de Política Migratoria va a mejorar la calidad de los servicios migratorios que vienen siendo prestados por el Departamento de Extranjería y Migración. Rogamos indiquen si el Estado parte ha adoptado medidas para fortalecer el Departamento de Extranjería y Migración como mecanismo de coordinación de una política migratoria integral basada en los derechos humanos en todos los órganos del Gobierno nacional y en el ámbito regional, provincial y municipal.

La nueva ley de Migración y Extranjería, establece una nueva institucionalidad migratoria, con la creación del Consejo de Política Migratoria, como ente asesor del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del país.

Este Consejo asesor, es multisectorial y será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud y el Ministro del Trabajo y Previsión Social. También lo integrarán sólo con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones municipales más representativas. Además, el presidente del Consejo podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros ministros; a funcionarios de la administración del estado o personas de reconocida competencia en el ámbito migratorio. El Consejo deberá sesionar cuando lo convoque su Presidente, con un mínimo de 2 veces al año.

Otro de los organismos que integran la institucionalidad migratoria, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que será la encargada de colaborar con el Presidente de la república en la formulación, implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia migratoria, con especial énfasis en la protección de los derechos de los extranjeros, entre otras funciones.

Por otro lado, la Subsecretaría del Interior, es el órgano de colaboración inmediata del Ministro del Interior y Seguridad Pública en todas aquellas materias relativas a la NLM y le corresponde ejercer una serie de atribuciones allí establecidas, tales como, la aprobación o rechazo de las solicitudes de refugio; expulsiones y prohibiciones de ingreso; regularizaciones migratorias; supervigilar al Servicio Nacional de Migraciones, a las autoridades de control y a todo otro órgano con competencias migratorias y velar porque éstos fiscalicen a los infractores de ley; disponer en casos excepcionales el otorgamiento de residencias temporales; coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la ley y su reglamento; y dictar las instrucciones para su correcta aplicación, previo informe del Servicio Nacional de Migraciones; determinar la condición de apátrida de los extranjeros, entre otras.

Dentro de la institucionalidad migratoria, se creó el Servicio Nacional de Migraciones, como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene dentro de sus principales funciones, la de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para su ejecución; recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país; autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de los extranjeros al país; resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, y su vigencia; declarar en caso de duda, si una persona es extranjera o no; establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros; aplicar las sanciones administrativas a los infractores de la ley; elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos y obligaciones de los extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Migratoria, entre otras.

Por otro lado, estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus representaciones consulares, tendrá dentro de sus funciones la de recibir y resolver las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria; resolver los permisos de residencia oficial; difundir las políticas migratorias del país; recibir y remitir al Servicio Nacional de Migraciones las solicitudes de residencia que presenten los extranjeros, entre otras. A diferencia de la actual ley, este Ministerio, ya no tendrá la atribución de resolver los permisos de residencia presentados fuera de Chile. Sólo es competente para resolver de manera provisoria el asilo político, cuando se solicita ante una representación diplomática.

Por último, incorporó dentro de la institucionalidad migratoria a la autoridad policial de control migratorio, la que se encuentra radicada en la Policía y cuya función principal es controlar el ingreso y egreso de extranjeros al territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros y fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país, además de aplicar la medida provisional de prohibición de ingreso, cuando concurra alguna de las causales legales.

El fortalecimiento de la institucionalidad migratoria, permitirá una mayor y mejor coordinación entre los distintos actores que tienen injerencia en la materia, a través del Consejo de Política Migratoria, hacia un objetivo común cual es el establecimiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería. Por otra parte, las propuestas sobre Política Migratoria que realice el Consejo, contarán con la participación de distintos ministerios, organizaciones comunales, y con la participación de entes público y privados, lo que permitirá un conocimiento más acabado de los requerimientos y necesidades sociales y económicas del país, poniendo énfasis en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, con independencia de su situación migratoria y con especial preocupación por los grupos más vulnerables, como uno de los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Por otro lado, la nueva ley, le encomienda como función al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la coordinación, actualización y evaluación periódica de la Política Migratoria, la que deberá ajustarse a la realidad del fenómeno migratorio del momento, en sus distintos ámbitos.

La incorporación que hace de otros actores como parte de la Institucionalidad migratoria, facilitará el establecimiento de políticas y compromisos sectoriales que beneficien a los migrantes, de acuerdo a sus necesidades, pudiendo planificar anticipadamente la obtención de recursos estatales para la ejecución de acciones, planes y programas que permitan una mayor integración e inserción de los migrantes a la sociedad chilena.

Además, la creación del Servicio Nacional de Migraciones, como servicio público descentralizado, con sus respectivas Direcciones Regionales, las que dependen jerárquicamente del Director Nacional, permitirá la aplicación de criterios uniformes de la legislación migratoria y de la Política Migratoria a nivel nacional, el que además se encuentra dotado de patrimonio propio, razón por la cual, la gestión será mucho más eficiente y le permitirá destinar y distribuir sus recursos, de acuerdo a las necesidades que presente el fenómeno migratorio.

Párrafo 5). Sírvanse informar acerca de las medidas adoptadas para poner en funcionamiento un sistema de información nacional sobre migración y el tipo de información que va a contener el nuevo sistema de registro total de todos los extranjeros planteado en el proyecto de ley de migración y extranjería y sus indicaciones. Suministren datos cualitativos y cuantitativos sobre el grado de efectividad de los derechos de los trabajadores migratorios que residen o están en tránsito en el Estado parte, así como sobre los emigrantes, desglosados por sexo, edad, estado civil, motivos de ingreso o salida del país y trabajo desempeñado, con respecto a los migrantes, tanto regulares como irregulares (CMW/C/CHL/CO/1, párrs. 16 y 17). Por favor también proporcionen datos estadísticos e información cualitativa sobre la situación de los niños no acompañados en el Estado parte y los niños de padres chilenos migrantes en el extranjero

El artículo 166 de la nueva ley, dispone la creación del Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por el Servicio Nacional de Migraciones y que tendrá el carácter de reservado. El Registro contendrá las siguientes menciones: 1. Los extranjeros que se encuentren en el país y el domicilio de los residentes; 2. Indicación del tipo de categoría migratoria y vigencia del permiso de residencia o permanencia de los extranjeros que se encuentren en el país; 3. Las autorizaciones previas o visas; 4. los permisos migratorios que hayan sido denegados; 5. Las prohibiciones de ingreso; 6. El registro de ingreso y egreso de personas del territorio nacional; y 7. Las infracciones de esta ley y las demás que conforme al artículo 146 ( sentencias condenatorias) sean necesarias para la evaluación de los permisos que esta ley contempla Además, el Registro deberá contener la información relativa a las visas oficiales otorgadas por Relaciones Exteriores.

Párrafo 6). Sírvanse informar al Comité acerca de los programas y/o mecanismos específicos para difundir y promover la Convención, incluso aquellos desarrollados en cooperación con la sociedad civil. Además, proporcionen información sobre los programas de capacitación sobre el contenido de la Convención dirigidos a la población en general y en particular a todos los funcionarios que trabajan, entre otros, en los ámbitos de la migración y en las fronteras, el empleo, la educación, la justicia y la salud, y también a nivel local. Informen asimismo sobre la existencia de un mecanismo de vigilancia de la Convención. En caso de que aún no se haya establecido, especifiquen las razones.

El DEM ha promovido iniciativas para promover una cultura de apertura y de no discriminación respecto de las personas migrantes, a través de la creación del área de Convivencia y Territorio, orienta al fortalecimiento de la institucionalidad municipal necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la atención e inclusión de la población migrante, mediante la creación por ejemplo, del Sello Migrante.

Asimismo, con la finalidad de potenciar y fortalecer la institucionalidad en los gobiernos locales, necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la atención e inclusión de la población migrante, se implementó el “Sello Migrante”[[1]](#footnote-1). Este consiste en un reconocimiento que entrega el Estado, a través del DEM, a aquellas municipalidades que realicen medidas de acción positivas tendientes a la inclusión de la población migrante, basadas en estándares de calidad y con un enfoque de derechos, inclusión y no discriminación. Para estos efectos, el DEM cumple un rol de acompañamiento y asesoría a los participantes, además de integrar la comisión evaluadora y posteriormente entregar el “Sello Migrante”. Actualmente participan 70 Municipalidades de este programa, de los cuales 8 cuentan con este reconocimiento estatal.

Para estos efectos, los municipios firman una carta de compromiso con cinco puntos de trabajo, el DEM cumple un rol de acompañamiento y asesoría a los municipios participantes, además de integrar la comisión evaluadora, que se completa con representantes del mundo académico y de la Subsecretaría de Desarrollo Comunal, que luego de evaluar positivamente informes de municipios postulantes entrega la certificación “Sello Migrante” a quienes han desarrollado positivamente los puntos comprometidos. y posteriormente se entrega el “Sello Migrante”. Actualmente han firmado la carta de compromiso 61 Municipalidades y 15 han recibido este reconocimiento estatal.

Por último, el año 2018 comenzó a funcionar el área de Convivencia y Territorio del DEM, que reúne la coordinación de las iniciativas desarrolladas en los párrafos precedentes, además de proponer la creación de nuevas acciones, mantener una comunicación directa y fluida con los demás órganos de la administración del Estado que se relacionan con la población migrante, implementar el plan nacional de capacitación en materia migratoria, y gestionar acciones de integración cultural en que participa el DEM, tanto directa como indirectamente.

Esta área además de actualizar el Sello Migrante creó el “Compromiso Migrante”, reconocimiento del Estado de Chile a aquellas instituciones, empresas y gremios que se destaquen por la inclusión, el enfoque intercultural y la no discriminación en su composición interna, gestión y relación con el entorno. Este reconocimiento es organizado por el DEM en conjunto con la Dirección del Trabajo (DT) y cuenta con el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las instituciones que participan deben firmar una carta de compromiso que consiste en cinco puntos de trabajo. Son acompañadas por el DEM y la DT y las organizaciones patrocinantes con talleres de formación y asesoría con respaldo técnico jurídico. Una vez al año se entrega el reconocimiento “Compromiso Migrante” a las instituciones que han cumplido con los puntos de trabajo comprometidos, que son: 1) Contar con estructuras internas para la inclusión, interculturalidad y la no discriminación. 2) Tener un plan de capacitación y sensibilización para los trabajadores de la institución. 3) Contar con políticas que aseguren buenas prácticas laborales, inclusivas, interculturales y no discriminatorias. 4) Realizar acciones que fomenten la interculturalidad al interior de la institución y en el país. 5) Participación de las y los extranjeros en las estructuras de la institución.

El área de Convivencia y Territorio ha ido formando un banco de buenas prácticas tanto de las experiencias vistas en el Compromiso Migrante como del Sello Migrante antes mencionado. (información actualizada por el área de Convivencia y Territorio).

Por otro lado, en su artículo 6 de la nueva ley de migraciones, establece que el Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá respetar las distintas cultura, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Además, en su artículo 13, señala que el Estado debe garantizar respecto de todo extranjero, lo que incluye también a los que se encuentren en situación migratoria irregular, la igualdad en el ejercicio de los derechos, promoviendo la debida protección contra la discriminación, velando por el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política de la Reública, en las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma.

En materia de educación, el Mineduc sostiene varias líneas de vinculación con la sociedad civil para distintos temas relacionados al que hacer ministerial y de sus servicios asociados. Específicamente para abordar temas asociados a migración durante el año 2019 se estableció una colaboración con ONG Raíces con quienes se realizó un trabajo técnico que se materializó en el documento “Trata de Personas. Guía de Trabajo para la prevención y detección temprana de víctimas en contexto educativo” disponible en la web https://migrantes.mineduc.cl/

Actualmente se encuentra en desarrollo un trabajo colaborativo con académicos del grupo de investigación Grinte que convoca a profesionales de diversas universidades del país, para una colaboración conjunta que de origen a Orientaciones dirigidas a las comunidades educativas relevando la importancia de los procesos de acogida que fortalecen la convivencia y previenen la exclusión y deserción escolar en las comunidades educativas en particular de aquellos grupos de estudiantes de especial protección.

Así también se han desarrollado programas de capacitación, durante el 2018/2019 y 2020 se llevaron a cabo capacitaciones para todos los funcionarios de los canales de atención de Ayuda Mineduc (Call Center, oficinas y equipo web) quienes tienen una vinculación directa con la ciudadanía, en las siguientes materias: Trámite matrícula provisoria, Proceso de validación, Exámenes libres menores, Casos bordes sistema de admisión escolar para la postulación de estudiantes extranjeros (Vinculación familias extranjeras, generación de IPE para los postulantes, IPA para la identificación de los apoderados). Además, durante el año 2019, se hicieron capacitaciones a nivel regional donde se abordaron temáticas relacionadas a los reconocimientos de estudios: Documentos necesarios para acceder al trámite, Identificación de documentación no original, Presentación de estructuras educativas de los países cuyos inmigrantes solicitan con mayor frecuencia el reconocimiento de sus estudios.

Por otra parte, durante el 2020 se fortaleció una coordinación con los equipos regionales a través de contrapartes técnicas designadas desde los equipos de educación de las Secretarías Regionales Ministeriales a nivel nacional con quienes se desarrolló un plan de formación de alrededor de 30 hrs donde se revisaron elementos que están a la base de la valoración de la diversidad cultural, desde una perspectiva institucional bajo los enfoques de inclusión e interculturalidad intercultural promoviendo el abordaje de lo socio emocional cómo vehículo para fortalecer el vínculo pedagógico que permite generar estrategias pertinentes para establecer las condiciones para avanzar en la enseñanza de los aprendizajes. En este marco se hizo hincapié en la situación de estudiantes extranjeros a nivel nacional de acuerdo con las distintas realidades territoriales, profundizando en la necesidad de flexibilizar las prácticas pedagógicas para prevenir la exclusión en especial de estudiantes no hispanoparlantes.

Por último, reportar que cada año, antes y durante el periodo de postulación del SAE, se activa en conjunto con el Ministerio del Interior un plan de trabajo para informar a los apoderados migrantes sobre el SAE y sobre los trámites adicionales que deben realizar dependiendo si tienen cédula de identidad chilena (vinculaciones) o no (IPE-IPA). Se difunde la información a través de redes sociales de las comunidades migrantes, se hacen reuniones con los líderes migrantes y durante el 2020 también se hizo un webinar con apoderados migrantes. Este año 2021 se continuará con la misma estrategia

Párrafo 7). Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas en colaboración con la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de migrantes y la academia a fin de reforzar la aplicación de la Convención y la participación general de la sociedad civil en el diseño, la aplicación y la evaluación de la política y de las reformas normativas en materia de migración en el Estado parte y de otras políticas pertinentes para garantizar los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

La ley 20.940 estableció un Fondo de Formación Sindical y relaciones laborales colaborativas. Según el segundo informe del Consejo Superior Laboral, los beneficiarios del Fondo en el año 2019 sumaron un total de 2.668 trabajadores y trabajadoras, dirigentes y dirigentes sindicales, micros y pequeños empresarios(as) y trabajadores(as), comprendiendo todas las regiones del país, siendo el 73,7% mujeres y un 3,4% extranjeros.

<http://www.dialogosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informe-de-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-sobre-la-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-N20.940-abril-2020.pdf>

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó las siguientes actividades:

* **A nivel nacional:**
* Se realizó durante el año 2020 la presentación de estudios en materia migrantes realizados por el Centro de Estudios Públicos y universidades.
* Las autoridades ministeriales se han reunido con representantes de las oficinas de migrantes de los municipios de Santiago y Estación Central.
* **A nivel regional:**
* Cada Servicio de Vivienda y Urbanización implementó una agenda de inclusión social, incluyendo el eje migrantes y refugiados. El objetivo de este eje de trabajo es “Promover y articular medidas afirmativas y acciones orientadas a reducir inequidades, brechas y barreras, que limitan la participación de los grupos de interés de la agenda de inclusión social en los programas de Ciudad y Territorio, Vivienda Adecuada y Gestión Interna”. Entre las acciones desarrolladas y vinculadas con la sociedad civil, se destacan las siguientes:

Cuadro N°2: Acciones realizadas por equipos Regionales (SEREMI y SERVIU) en coordinación con la sociedad civil:

| **Región** | **Acciones realizadas** |
| --- | --- |
| Región de Valparaíso | 2019: Actividad informativa sobre la política habitacional actual a un grupo de personas migrantes y/o refugiados de la región. En esta actividad participaron SEREMI Valparaíso, Universidad de Playa Ancha y Observatorio de Participación Social y Territorio. |
| Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | 2019: Para fortalecer y adecuar los sistemas de atención, difusión en la Institución, promoviendo una adecuada atención de la población extranjera migrante, desde un enfoque intercultural e inclusivo, se realizó capacitación “fomentando el buen trato de los Migrantes”, Expositor Maria Rocío Menateaux Directora de la ONG Marq'ay. |
| Región de La Araucanía | 2019: Jornadas de trabajo sobre la demanda habitacional que existe con Dirigentes(as) de las agrupaciones de inmigrantes establecidas en la región de La Araucanía. Participantes: Fundación Social Remanente, Organización Comunitaria de Haitianos “Lakay se Lakay, Agrupación SC Colombia y Perú Llagta. |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 2019: Charla sobre: "Programas MINVU", para Agrupación de Migrantes Latinos Unidos.  Charla: "Migración, contexto y algo más", realizada por Carlos Baeza, Coordinador de Asuntos Migratorios OIM. |

B. Información relativa a los artículos de la Convención

1. Principios generales

Párrafo 8). Sírvanse informar en qué medida las disposiciones de la Convención han sido aplicadas directamente por los funcionarios de la administración pública, incluso por las Superintendencias de Salud, Pensiones, Educación y de Seguridad Social, y si han sido invocadas directamente ante los tribunales; de ser así, proporcionen ejemplos. Faciliten también información sobre:

**Párrafo 8) a) Los órganos judiciales y administrativos competentes para investigar y resolver las denuncias de los trabajadores migratorios y de sus familiares, en particular las de los trabajadores migratorios que se encuentran en situación irregular y b) En qué medida se prevé la protección legal de las personas que denuncian abuso y maltratos o discriminación, independientemente de su situación migratoria**

En lo relativo a la nueva ley de migraciones, ella contempla en su título II los Principios Fundamentales de la Protección, el que en su artículo 3 establece que es deber del Estado proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, estableciendo una serie de principios que deben guiar la gestión migratoria, tales como el interés superior de los NNA; el procedimiento migratorio informado; el debido proceso, la integración e inclusión; la promoción de la regularidad migratoria; la no criminalización de la migración; y la protección complementaria, entre otros, además del reconocimiento de los derechos de acceso a la educación, salud, laborales, entre otros, en igualdad de condiciones que los nacionales y con independencia de la situación migratoria del extranjero en el país.

Uno de los aspectos a destacar, es el que dice relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo 117 sobre los extranjeros que trabajen sin autorización, los que no serán sancionados por este hecho en el caso de que denunciaren a su empleador, por incumplimiento de la legislación laboral, migratoria o de cualquier otra naturaleza, ante el Servicio Nacional de Migraciones, la dirección del Trabajo, los Tribunales de Justicia o cualquier otro órgano de la administración del Estado.

En materia laboral, los trabajadores, sin distinción en cuanto a su nacionalidad, pueden presentar denuncias o reclamos ante la Inspección del Trabajo, servicio dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Los reclamos dicen relación con vulneraciones producidas con ocasión del término de la relación laboral; en cambio las denuncias, pueden presentarse, incluso de manera anónima, durante la vigencia de la relación laboral.

<https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-26864.html>

La nacionalidad u origen del trabajador no es un obstáculo para que ejerza sus derechos y reclame de vulneraciones laborales.

**Párrafo 8) c)** **El número y el tipo de denuncias examinadas por los órganos judiciales y administrativos en los últimos cinco años, desglosadas por sexo, edad, nacionalidad de las personas afectadas y el tipo de delito y/o conducta denunciada, y los resultados de las investigaciones;**

El año 2020 la Dirección del Trabajo recibió 55.424 denuncias por vulneración a la normativa. Del total de las denuncias directamente interpuestas solo por trabajadores, el 11,8% provino de extranjeros.

Cuatro nacionalidades concentran la gran mayoría de las denuncias (89,2%) de los trabajadores: venozolanos/as (44,8%), haitianos/as (21,6%), peruanos/as (11,8%) y colombianos/as (11,1%), no registrando diferencias sustantivas con una distribución similar entre mujeres (49,6%) y hombres (50,4%).

El año cerró con un número total de 4.367 fiscalizaciones por denuncias de extranjeros a empresas, aplicando 1.424 sanciones por parte de la Dirección del Trabajo. Prácticamente la mitad de estas sanciones fueron cursadas a empresas de dos ramas de actividad económica: comercio (24,9%) y de actividades de alojamiento y servicio de comidas (24,6%).

Entre las materias más sancionadas se encuentran: las infracciones al DFL2 referidas al impedimento u obstáculos a: el ejercicio de las funciones y de las atribuciones de los Inspectores (24,2%), sobre “jornada de trabajo” (22,5%), contrato de trabajo (14,1%) y remuneraciones(14,1%).

20.087 reclamos administrativos individuales fueron interpuestos ante las Inspecciones del Trabajo por extranjeros, una vez cesada la relación laboral, equivalente al 19,1% del total anual.

Las cinco materias más reclamadas son: finiquito (11,6%), cotizaciones Administradoras de Fondos Previsionales AFP (11,2%), feriado legal/proporcional (10,9%), cotizaciones INP instituto de normalización previsional (10,3%) y aportes al seguro de cesantía (10,0%).

Finalmente, un total de 1.325 denuncias presentadas por vulneración de Derechos Fundamentales en la empresa, el 9,9% corresponden a trabajadores extranjeros. Del total de denuncias de extranjeros, al cerrar el año 2020 sólo 34 fueron constatadas (2,6%).

**Párrafo 8 letra e) Las reparaciones, incluidas las indemnizaciones concedidas a las víctimas de esas vulneraciones, incluido en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales;**

En materia laboral, tanto los procedimientos administrativos como jurisdiccionales dan efectivo acceso a todos los recursos y vías de reparación, según la legislación vigente. Cabe destacar a este respecto, el procedimiento de tutela de garantías fundamentales, el cual contempla un sistema indemnizatorio especial, conforme a los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436>

**Párrafo 8) f) Las medidas que se hayan adoptado para informar a los trabajadores migratorios y a sus familiares sobre los recursos de que disponen en caso de vulneración de sus derechos.**

Sobre el particular, cabe destacar la estrategia institucional elaborada por la Dirección del Trabajo, servicio público encargado de la fiscalización laboral. En dicho contexto, desde el año 2018, se comprometió un Plan de Acción, asociado a un indicador de desempeño colectivo, cuya meta exigía el cumplimiento de, al menos el 60% de los compromisos, los cuales se cumplieron en su totalidad.

Ese Plan de Acción Institucional se estructuró en los siguientes 10 componentes:

i) Sistema de acopio de información sistematizada por otras instituciones sobre trabajo migrante disponible;

ii)Protocolos de coordinación con instituciones públicas y privadas involucradas firmadas;

iii) Dimensión migrante incorporada en la ENCLA o “Encuesta Laboral” (cuya publicación se realizó este año 2021);

iv) Módulo migrante en el Programa de formación de competencias de la Escuela Técnica de Formación implementado;

v) Programa de capacitación especializada por año para incrementar competencias de las las/los funcionarios de la DT;

vi) Módulo de formación específico sobre regularización migratoria implementado;

vii) Actualización de los registros informáticos institucionales incorporando en estos la variable “nacionalidad”;

viii) Información jurídica sobre trabajo migratorio disponible en la intranet;

ix) Mecanismos de equidad de la DT hacia el trabajo migrante incorporados en los sistemas de la DT;

x) Información Jurídica sobre trabajo migratorio disponible en la Intranet.

Así, la Dirección del Trabajo estableció una estrategia transversal y permanente para incrementar las competencias institucionales de manera continua y responder adecuadamente a las especificidades propias del trabajador migrante.

Por ejemplo, se actualizaron una serie de registros informáticos de los sistemas que operan en la Dirección del Trabajo, lo que permitió obtener una data de mayor completitud sobre los usuarios del Servicio, esta data hoy es fundamental para los análisis y estudios que realiza el Departamento de Estudios de la DT. Las variables que existían, antes de este desarrollo, no respondían a las necesidades de registros que se estaban suscitando y por lo tanto no daban cuenta de la realidad de nacionalidades y países de origen de los usuarios que tiene la Dirección del Trabajo, por esa razón, se levantó como una necesidad la actualización del listado de nacionalidades, entre otros registros.

De ese modo, en los años 2019 y 2020, los compromisos bajaron a las líneas operativas, en forma de indicadores de rendimiento colectivo que tenían por objeto incrementar las competencias institucionales para enfrentar las especificidades de los trabajadores migrantes y lograr una debida caracterización como usuarios permanentes de la DT.

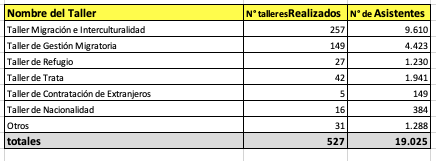
2. Parte II de la Convención

Artículo 7

Párrafo 9) En relación con las anteriores recomendaciones formuladas por el Comité, sírvanse informar acerca de:

a) Las medidas para prevenir y eliminar las actitudes discriminatorias y la estigmatización social contra los trabajadores migrantes y sus familiares en el Estado parte (CMW/C/CHL/CO/1, párr. 19), a nivel regional, provincial y en las comunas. Incluyan también información sobre las medidas adoptadas para la prevención de la xenofobia y el discurso de odio proveniente de funcionarios públicos y de particulares frente a trabajadores migrantes;

Desde el año 2015 hasta marzo de 2021 se han realizado un total de 527 talleres de capacitación, con un total de personas capacitadas de 9.610, pertenecientes al sector privado, al tercer sector y la gran mayoría al sector público. (información actualizada por el área de Convivencia y Territorio)



Además, en el año 2019, se realizó una capacitación en frontera, dirigida a los funcionarios de la PDI, que realizan el control migratorio. Se capacitó en materia de refugio, a más de 100 personas, en los pasos fronterizos de Chacalluta, Colchane, Los Libertadores y Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los que tienen el mayor flujo migratorio.

En este literal debe destacarse además que, la NLM realizó importantes avances en materia de no discriminación, en primer término al incorporar en su artículo 1 punto 7 define lo que debe entenderse por discriminación arbitraria, señalando que.

Por otro lado, en su artículo 6, establece que el Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la interculturalidad, con el objeto de promover la incorporación y participación armónica de los extranjeros en la realidad social, cultural, política y económica del país, para lo cual deberá respetar las distintas cultura, idiomas, tradiciones, creencias y religiones, con el debido respeto a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Además, en su artículo 13, establece que el estado debe garantizar respecto de todo extranjero, lo que incluye también a los que se encuentren en situación migratoria irregular, la igualdad en el ejercicio de los derechos, promoviendo la debida protección contra la discriminación, velando por el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la CPR, en las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma.

El mismo artículo señala que aquellos extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, podrán interponer las acciones que correspondan, según la naturaleza del derecho afectado.

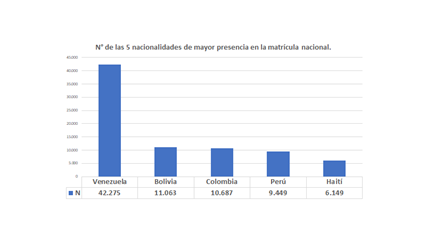
Finalmente, este precepto hace una referencia especial relativa a la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género.

El Ministerio de Educación presentó la ***Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022*,** donde se describe el conjunto de herramientas normativas e institucionales con que cuenta el sistema escolar para abordar el proceso de escolarización de los estudiantes migrantes. Este documento señala que es necesario incluir a las áreas académica y administrativa en el área de convivencia escolar, promover acciones concretas que prevengan el racismo y la xenofobia en la comunidad, y entregar recursos y formación didáctica específica y para la enseñanza de español como segunda lengua (ELE).

Desde la Política se releva, garantizar el derecho a educación sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo el acceso al sistema educativo independiente de su condición migratoria. Para ello se ha buscando **disminuir la brecha idiomática** para el acceso se establece que los **formularios web de solicitud de IPE e IPA que disponen su traducción en línea al Creole** dentro de la plataforma de Ayuda Mineduc, además la difusión de campañas que incluyen **videos tutoriales, folletería con información** traducida **al creole** disponible para los apoderados, y se ha dispuesto la contratación de un funcionario en la oficina de Ayuda Mineduc de la Secreduc RM que hable creole, para atender a los usuarios que no hablan español provenientes de Haití, para traducir y favorecer la comprensión de los procesos de postulación al nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Datos 2020 de estudiantes de nacionalidad haitiana: **6.149,** distribuido en las siguientes dependencias en el sistema educativo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dependencia** | **Total** |
| **Municipal** | 3.776 |
| **Part. Subv.** | 1.850 |
| **Part. Pagado** | 3 |
| **CAD** | 105 |
| **SLE** | 415 |



Por otro lado, considerando la diversidad cultural presente en las comunidades educativas cabe destacar que actualmente, el Programa de Alimentación Escolar, cuenta con diversas estrategias para que los estudiantes consuman las preparaciones entregadas por el programa, ejemplo de ello mejoras en las preparaciones desarrolladas por el Laboratorio Gastronómico, Cocina con Raíces y Cocina del Mundo que de acuerdo a lo establecido en la nueva licitación deben ser entregadas en una frecuencia de 4 veces al mes. LA Cocina del Mundo, está enfocada en establecimientos/comunas que cuenten con un alto porcentaje de estudiantes migrantes, en estos establecimientos el prestador debe incluir en las minutas preparaciones específicas de otros países como ají de gallina, pabellón criollo y pollo atomatado, que son preparaciones típicas de Perú, Venezuela y Haití. Lo anterior, cumpliendo las exigencias de las estructuras alimentarias indicadas por JUNAEB. Con la incorporación de estos platos se espera, asimismo, educar a los estudiantes chilenos en las distintas costumbres de quienes llegan al país, generando un intercambio cultural entre ambos.

La presencia de estos nuevos estudiantes en los establecimientos escolares refleja la necesidad de apoyar a todos los actores de la comunidad escolar para adquirir competencias que promuevan su comunicación efectiva y faciliten el aprendizaje y la convivencia en diversidad lingüística cultural.

Por ello el Ministerio de Educación, en busca de entregar recursos y formación didáctica específica para la enseñanza de español como segunda lengua (ELE), ha establecido desde el año 2018 una red de colaboración con el Área de Español para Extranjeros del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. El objetivo de esta iniciativa consiste en orientar a diferentes actores de la comunidad escolar en la comprensión del proceso sociocultural de aprendizaje de una segunda lengua mediante la adquisición de herramientas metodológicas que facilitan el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Para dar cumplimiento a este propósito se realizó, **una formación para monitores del programa de alfabetización pertenecientes al equipo de personas jóvenes y adultas (EPJA), junto al diseño de un material educativo para el aprendizaje del español de estudiantes haitianos en esa modalidad.**

En esta sintonía el año 2020 se inicia una estrategia a nivel Ministerial para proveer de herramientas de **comunicación intercultural** a través de un curso de: **Formación en diversidad lingüística y cultural para la comunicación con personas no hispanohablantes de 40 hrs sincrónicas para profesionales de las comunidades educativas** y el desarrollo de una guía metodológica para la comunicación intercultural con personas no hispanohablantes. Este año está próximo a empezar la segunda parte de profundización del curso de formación para docentes y se realizan las gestiones y adecuaciones de la propuesta para que pase a ser parte de la oferta formativa del Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Los diversos Servicios dependientes del Ministerio del trabajo y previsión Social han desarrollado diversos cursos de capacitación en materia migrantes y otras relacionadas.

Solo a nivel ministerial, durante los años 2019 y 2020 se realizaron las siguientes capacitaciones:

* Implementación de políticas de género (herramientas de transversalización del enfoque de género en la función pública)
* Jornada de capacitación en derechos humanos
* Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres
* Seminario equidad de genero
* Migración, derechos humanos y políticas públicas
* La inclusión laboral del trabajador público- discapacidad: inclusión, diversidad y no discriminación
* Políticas públicas pro equidad de género
* Introducción a los derechos humanos para funcionarios públicos
* Género avanzado aplicado al quehacer del servicio
* Prevención de maltrato y acoso laboral y sexual
* Inclusión, migrantes y personas con discapacidad

**Párrafo 9) d**) **Las medidas para asegurar la igualdad de género en las políticas migratorias en el Estado parte, en particular las medidas para eliminar la discriminación que afecta a las mujeres migrantes tales como la violencia basada en el género contra las mujeres, y la discriminación en el disfrute de sus derechos a la salud, el empleo y la educación.**

Es necesario hacer presente que la nueva ley de Migración y Extranjería, en su artículo 13 inciso final, que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar, y que las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado, en virtud del cual el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su permanencia.

En relación con la labor realizada por nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), cabe informar que, a partir del 2019, los programas de capacitación “Fórmate para el Trabajo”, “Reinvéntate”, “Becas Fondo Cesantía Solidario” y “Talento Digital”, contienen un mecanismo de incentivo de colocación de mujeres que consiste en un pago mayor en el caso de intermediar esta población objetivo. A estos programas pueden acceder tosas las mujeres sin distinción en su nacionalidad, si se trata de migrantes con RUT, que estén en proceso de tramitación de su RUT o con pasaporte al día.

El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población. Pueden acceder todas las mujeres, sin distinción por nacionalidad. Si se trata de migrantes, para ser beneficiarias deben tener un RUT.

Por otra parte, en el Subsidio al Empleo, nueva medida de recuperación enfocada en incentivar el regreso de los trabajadores (Línea Regresa) y trabajadoras suspendidas bajo la Ley de Protección del Empleo, LPE, y en promover la contratación de nuevas personas (Línea Contrata) en las empresas ante las difíciles circunstancias laborales a consecuencia de las medidas de control de la crisis sanitaria COVID-19. Tanto en la Línea Regresa como en la Línea Contrata, existen incentivos especiales cuando se trata de mujeres. Las empresas podrán obtener el beneficio en el caso de contratar a mujeres migrantes con RUT.

* Línea Regresa: En el caso de las mujeres (sin límite de edad), para mujeres jóvenes de entre 18 y 23 años el monto del beneficio es de $200.000 mensuales ($160.000 para los hombres).
* Línea Contrata: mujeres (sin límite de edad, el subsidio será igual al 65% de la remuneración mensual bruta, con tope máximo de $290.000 (en el caso de los hombres el monto del subsidio es equivalente al 50% de la remuneración mensual bruta con tope de hasta $250.000)

También existe el Subsidio Protege, orientado a trabajadoras, dependientes o independientes, que tengan el cuidado de niños y niñas menores de 2 años, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador. Se trata de un subsidio mensual de $200.000 que se entregará directamente a los trabajadores beneficiarios, para que sea destinado al cuidado de los niños y niñas. Para ser beneficiarias, las mujeres migrantes deben tener un RUT.

Finalmente es importante señalar que a través de los programas sociales de SENCE, se ha capacitado durante el 2019 y 2020, a un total de 5.739 migrantes. De los cuales, 3.522 son mujeres.

3. Parte III de la Convención

Artículos 8 a 15

Párrafo 11). Sírvanse informar las medidas adoptadas por el Estado parte para cumplir con las recomendaciones del Comité (CMW/C/CHL/CO/1, párrs. 36 y 37), en particular para proteger a las mujeres trabajadoras domésticas migratorias y asegurar que puedan acceder a los mecanismos de presentación de denuncias contra sus empleadores en casos de abusos y malos tratos y obtener las reparaciones adecuadas. Asimismo, informen sobre las medidas tomadas para armonizar la legislación nacional con las obligaciones del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) y del Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El 19 de enero de 2021, Chile ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio núm. 29 sobre el Trabajo Forzoso de la OIT, constituyéndose como el segundo Estado de América del Sur en asumir el desafío de avanzar para ser un país libre de trabajo forzoso.

Esta ratificación demuestra una vez más el firme compromiso de Chile de luchar contra el trabajo forzoso y de garantizar la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, contribuyendo de manera activa a la consecución del trabajo decente y a que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030.

Los Estados que ratifican el Protocolo se obligan a adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar tales prácticas, proporcionando a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como indemnizaciones, y aplicando sanciones a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.

<https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_766656/lang--en/index.htm>

Párrafo 12). Por favor proporcionen información sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños migrantes, específicamente los hijos de trabajadores migrantes en situación irregular. En particular, faciliten información acerca de las medidas dirigidas a:

**Párrafo 12) a) Proteger a los niños contra todas las formas de explotación infantil, especialmente respecto a las peores formas de trabajo infantil;**

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Programa Contra el Trabajo Infantil, es quien lidera la obligación que emana de la Convención de los Derechos del Niño de erradicar el trabajo infantil, sus peores formas y la de proteger al adolescente trabajador. Es por ello, que a partir del año 2014 se han centrado los esfuerzos en diseñar e implementar la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador 2015 – 2025.

Por otra parte, la reciente ley 21.271 publicada en octubre del 2020, actualiza los requisitos para la contratación de los adolescentes con edad para trabajar, regulando las exigencias que se deben cumplir. Además, esta Ley:

* Regula la jornada laboral, manteniendo que esta no puede ser superior a 30 horas semanales, pero agregando que podrán ser distribuidas en un máximo de 6 horas diarias en el año escolar y hasta 8 horas diarias durante la interrupción del año escolar y en el período de vacaciones.
* Establece multas especiales para el empleador que contrate niños o niñas para la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación. En estos casos, las multas van desde 10 a 300 Unidades Tributarias Mensuales, según el tamaño de la empresa. La cuantía de la multa será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, su reiteración y el número de personas involucradas.
* Establece multas para los empleadores que infrinjan las normas relativas a la contratación de un adolescente con edad de trabajar. Las multas van de las 2 a 60 UTM.
* Incorpora nuevas sanciones para empleadores que infrinjan reiteradamente la normativa, creándose también un registro público de empresas infractoras, que al efecto llevará la Dirección del Trabajo.

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1150357>

Proteger a los niños contra todas las formas de explotación infantil, especialmente respecto a las peores formas de trabajo infantil;

El Servicio Nacional de Menores (“SENAME”), de conformidad con el Decreto Ley Nº 2.465, de 1979, que fija el texto de la Ley Orgánica del SENAME, modificado por la Ley Nº 20.032, que estableció un Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores acreditados, cuenta con centros de administración directa de atención en modalidad de cuidados alternativos residencial y familiar, así como una red de colaboradores acreditados, que postulan con proyectos - en modalidad de atención ambulatoria y residencial -, a licitaciones públicas para la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias, en virtud del Reglamento de la Ley N°20.032.

En dicho contexto, el Servicio, detenta la protección y restitución de los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, contando con un sistema de registro de datos sobre la población atendida bajo las diversas líneas de acción, plataforma denominada “SENAINFO”. Esta incluye todas las formas de violencias y vulneraciones, así como un sistema especial denominado “Sistema de Registro Único e Intervención de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI)”, que lidera SENAME, el cual es alimentado con datos proporcionados principalmente por la policía de Carabineros de Chile y la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Sistema PFTI, es una herramienta de detección que permite ingresar casos de niñas, niños y adolescentes que podrían estar siendo vulnerados en sus derechos, según las categorías de Peores Formas de Trabajo Infantil, incluida la Explotación Sexual Comercial.

**Párrafo 12) b) Promover la sensibilización del público en general acerca de los efectos perjudiciales de todas las formas de explotación sexual, sea o no con fines comerciales, en particular la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía**

En términos históricos, los esfuerzos del Estado de Chile a través de SENAME, en torno al fenómeno de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), datan de 1999, es así como se han elaborado y co – coninstruido estrategias tan relevantes como los “Marco de Acción contra la ESCNNA”. Sin embargo, la complejidad y multifactorialidad del tema de la ESCNNA así como la trata de personas y otras manifestaciones de explotación, se consigna como un escenario complejo en términos técnicos y legales de abordar e intervenir a nivel de las y los usuarios, familias y comunidad.

La ESCNNA, en cualquiera de sus modalidades, es considerada una de las más graves vulneraciones a los Derechos Humanos, ocasionando devastadoras consecuencias en la integridad física, psíquica y social de niñas, niños y adolescentes (NNA), y en las comunidades. Es una práctica delictiva, en la que una persona adulta abusa de la condición de vulnerabilidad social (etaria, emocional, de género, entre otras) de una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales propios o de otras personas, entregándole a cambio un pago a través de dinero, regalos, protección, u otros elementos materiales o inmateriales. En este sentido, es un fenómeno social que se desarrolla bajo lógicas de poder, por parte de una persona adulta hacia un NNA en condición de vulnerabilidad.

Con relación a la caracterización del fenómeno de la ESCNNA en Chile, a partir de la evidencia disponible, podemos señalar que se refuerza que el fenómeno está vinculado a diversas condiciones socio económicas, tales como pobreza, precariedad e inestabilidad laboral, actividades delictuales, consumo problemático de alcohol y drogas, así como situaciones de violencia, entre otras. Por lo cual, cada institución del Estado debe asumir tareas específicas y articuladas entre sí que contribuyan a abordar las características del fenómeno que apunten a la prevención y erradicación de la ESCNNA. De esta forma, SENAME, mantiene en sus Orientaciones Técnicas vigentes, del Programa de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE), considera la Trata de Personas de niñas, niños y adolescentes, como una modalidad de la Explotación Sexual Comercial (ESC), siendo las víctimas de este delito, sujeto de atención de dicho programa.

**Párrafo 12) c) Establecer un sistema de recopilación de datos sobre el trabajo infantil que dé cuenta del trabajo de los niños migrantes.**

Como se mencionó con anterioridad, SENAME cuenta con la plataforma SENAINFO, sistema de registro de datos sobre la población atendida bajo las diversas líneas de acción. Esta incluye todas las formas de violencias y vulneraciones, así como un sistema especial denominado “Sistema de Registro Único e Intervención de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI)”, que lidera SENAME, el cual es alimentado con datos proporcionados principalmente por la policía de Carabineros de Chile y la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cabe señalar, que esta plataforma consigna si el Niño, Niña, Adolescente o Joven es chileno o extranjero, y si se trata de este último caso, se registra la nacionalidad.

Párrafo 13). Sírvanse proporcionar información sobre los datos cualitativos y cuantitativos relativos a los derechos de los niños migrantes no acompañados o separados de sus padres en el Estado parte, así como sobre sus condiciones de vida. Informen también sobre las políticas para la protección de los hijos de los trabajadores migratorios en el Estado parte, incluidos los que se encuentran en situación irregular (CMW/C/CHL/CO/1, párrs. 34 y 35), y su acceso efectivo a la educación.

De conformidad a las facultades conferidas en el D.L. N° 2.465, de 1979, el SENAME ha dictado instrucciones para la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, las que, se encuentran contenidas en el Oficio Circular N° 4, de 02 de marzo de 2018, que “Informa política y procedimiento sobre la Gestión de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes vulnerados en sus derechos, extranjeros o chilenos que se encuentren en el exterior o deban ser reunificados con familiares en el extranjero, y deja sin efecto circular N°10, de 2010, de la Dirección Nacional del SENAME”.

Desde su publicación, el Servicio ha realizado actividades de difusión, entre las que se cuentan capacitaciones dentro de la Red SENAME y diversas reuniones con el intersector y Tribunales de Justicia, entre otros, y el envío de la circular -a través del Ord. N° 1236 de la Directora Nacional, de fecha 31 de mayo de 2018-, a la Corte Suprema, Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Educación, así como las Secretarías Regionales Ministeriales de dichas carteras a nivel nacional. Así como el Servicio de Registro Civil e Identificación, Instituto Nacional de Derechos Humanos, las policías y las Oficinas de Migrantes de Municipalidades.

Sus contenidos se organizan en 3 grandes temáticas:

I. Acceso a los derechos de salud, educación y regularización migratoria;

II. Atención de NNA adolescentes extranjeros en centros de administración directa, en programas de familias de acogida, en centros residenciales y en programas ambulatorios de la red de colaboradores de SENAME;

III. Casos especiales en el contexto de procesos migratorios.

En materia de migración y protección de derechos, ni las leyes, ni las políticas ni los programas hacen distinción alguna entre niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros en consonancia con los compromisos adquiridos por Chile al suscribir acuerdos internacionales, principalmente con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los proyectos y programas de protección de los derechos de los niños se aplican, de este modo, a los niños chilenos o extranjeros, estén en Chile en forma transitoria o sean considerados inmigrantes. Las medidas de protección a favor de un niño, pueden ser interpuestas en Chile, si la situación lo amerita, desde el momento que ingresan al territorio nacional, y a los programas de protección del SENAME destinados a la infancia vulnerada en sus derechos, pueden acceder niños, niñas y adolescentes residentes en Chile de manera temporal o permanente, sea cual sea su país de origen.

En particular podemos destacar la atención que se entrega a las familias, sean adultos, niños, niñas y adolescentes, proporcionando a los adultos responsables información respecto de los distintos servicios públicos y redes de apoyo local a las cuales pueden acceder, empoderándolos en el ejercicio de sus derechos. Se les informa, además, respecto de la regularización migratoria, incentivando y apoyando la realización del trámite y el acceso a redes para lograr la solución de los problemas migratorios a los que se ven enfrentados, con la finalidad de que los integrantes del grupo familiar, en especial los niños, niñas y adolescentes, accedan a una visa de residencia para facilitar, entre otros, su efectiva integración social, y su inserción en el sistema educacional y de salud. También es destacable la coordinación internacional que se realiza con las contrapartes de SENAME en el extranjero, que han posibilitado que hijos, nietos, hermanos o sobrinos, puedan logar la reunificación familiar con su padre, o su familia extensa, en caso de encontrarse en situación de abandono. Gracias a esta coordinación, desde el año 2002 al 2020, 153 niños, niñas y adolescentes chilenos y extranjeros lograron trasladarse de manera segura entre un país y otro, para reunificarse con miembros de su familia comprometidos en protegerlos y en restituirles los derechos que les habían sido vulnerados.

En este ámbito de protección de derechos, los niños, niñas y adolescentes migrantes ingresados a la red SENAME afectados por graves vulneraciones, se han definido procedimientos técnicos-administrativos, con el fin de dar respuesta a sus necesidades y garantizar la restitución de sus derechos. De acuerdo a la naturaleza del problema que los afecte, se realizan las intervenciones, coordinaciones y derivaciones pertinentes para su protección integral. Las gestiones realizadas en su beneficio, tendrán como objetivo principal, privilegiar el interés superior del niño, e incluyen, entre otras acciones, contactos con los respectivos Consulados, la ubicación de la familia de origen o vincular, la regularización migratoria con la obtención de certificados de nacimiento, cédula de Identidad y/o pasaporte, visa o salvoconducto, según corresponda. Lo anterior implica, generalmente, un trabajo intersectorial en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y Consulados, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, instituciones de protección a la infancia de otros países, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Cabe señalar que en los casos en los cuales un niño, niña o adolescente migrante se encuentra sometido a algún tipo de violencia, daño corporal u otra vulneración grave de derechos, pasa a ser sujeto de atención del sistema de protección a la infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos al igual que cualquier menor de edad chileno. Sin embargo, la recuperación de su derecho vulnerado requiere, generalmente, la activación de otros mecanismos de intervención, tales como la coordinación con organismos de protección a la infancia en otros países, para lograr la respuesta más adecuada a su necesidad en aplicación del Principio del Interés Superior del Niño.

- Acuerdos con el DEM-Ministerio del Interior

Por otra parte, para una mayor protección de los niños, niñas migrantes, y una gestión más eficiente de cada caso, SENAME suscribió un acuerdo de colaboración con el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM), con fecha 18.12.2009, que permite facilitar la regularización migratoria a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren ingresados en los programas de SENAME, o de su red de organismos colaboradores.

SENAME firmó un segundo convenio de colaboración con el Ministerio del Interior el 26 de febrero de 2014, por el que acordaron un Protocolo Relativo a solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de niños, niñas y adolescentes.

- Capacitación en atención a niños, niñas y adolescentes migrantes

Cabe destacar, además, que desde el año 2010, la Unidad de Relaciones Internacionales de SENAME, en conjunto con el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ), y el Departamento de Protección de Derechos (DEPRODE), con la colaboración del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, han realizado los “Talleres sobre la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes”, en cinco regiones del país.

Estos talleres tienen por objeto capacitar a los equipos técnicos y profesionales que intervienen con niños, niñas y adolescentes extranjeros ingresados en centros o programas pertenecientes a SENAME o a la red de instituciones colaboradoras, ya sea en cumplimiento de la ley de responsabilidad penal adolescente o en programas residenciales o ambulatorios del área de protección de derechos.

Los mencionados talleres se han efectuado en la Región Metropolitana, y en las ciudades de Arica, Calama, Iquique, Antofagasta, Punta Arenas, Valparaíso, Concepción, entre otras, seleccionadas debido a que concentran un gran número de población migrante.

- Adolescentes migrantes infractores de ley

Como hemos señalado, SENAME garantiza protección a los niños/as y adolescentes migrantes ingresados a la red Sename, mediante su integración a programas de prevención, protección, o reparación, como consecuencia de situaciones de vulneración de derechos. También son sujetos de protección, los adolescentes migrantes, infractores de ley penal, que son ingresados a programas de reinserción en igualdad de condiciones que los adolescentes chilenos infractores de ley, a los cuales se les reconoce, además, la especificidad de su condición de migrante.

A este respecto, la ley N° 20.084, que entró en vigencia en junio de 2007, resguarda el interés superior del adolescente, señalando en su artículo N° 2: “En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente que se expresa en el reconocimiento y respeto a sus derechos. En la aplicación de esta ley las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

Lo anterior, explicita que Chile asegura a todos los adolescentes entre 14 años y 17 años 11 meses imputados por alguna situación constitutiva de delito, incluidos los adolescentes migrantes, garantías procesales y pleno ejercicio de sus derechos durante el proceso investigativo y el cumplimiento de una eventual medida o sanción.

Respecto al cumplimiento de los derechos de los adolescentes extranjeros, de 14 y más años de edad, sujetos a una medida o sanción como consecuencia de haber infringido la ley penal, el reglamento de la ley 20.084 que regula la ejecución y cumplimiento de las medidas y sanciones contenidas en dicho cuerpo legal, establece:

a. La obligatoriedad de poner en conocimiento de todos los adolescentes que han sido objeto de la aplicación de una sanción o medida, de sus derechos y deberes, y en caso de ser un adolescente extranjero que no hable idioma castellano, deberán comunicársele en su idioma de origen.

b. Que en el caso de aplicársele una sanción o medida a un adolescente extranjero, con residencia habitual fuera de Chile, o cuando el mismo lo solicite, se deberá poner en conocimiento de las autoridades consulares del país de origen, el ingreso al centro o programa.

A objeto de dar cumplimiento a lo señalado en los puntos anteriores, el Servicio Nacional de Menores, ha dictado un instructivo bajo resolución exenta N° 0225/B del 23 de mayo del 2007, en el cual señala la “forma de proceder en relación a adolescentes extranjeros sujetos a una medida o sanción como consecuencia de haber infringido la ley penal”. En los artículos N° 2°,3°,4° y 5° del cuerpo legal en comento, se le reconoce a todo adolescente infractor de ley penal, una nómina de derechos y deberes, los cuales se explicitan en la resolución exenta N° 0224/B del 23 de mayo del 2007, para los centros o programas que ejecuten medidas o sanciones, sean estas privativas como no privativas de libertad, entre los que podemos señalar los siguientes, sin perjuicio de la obligatoriedad de la totalidad de ellos:

Todo adolescente sujeto a una medida o sanción tiene derecho a un tratamiento digno:

• Derecho a la igualdad y no discriminación. Las normas establecidas deben ser aplicadas imparcialmente, no pudiendo existir diferencias de trato fundadas en el nacimiento, origen étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, opinión política, creencia religiosa, condición económica, circunstancias personales de los padres, familiares o personas que tengan a su cuidado al adolescente, u otras que tengan por objeto menoscabar el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos del adolescente.

• Derecho a ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad, como también de las condiciones y objetivos que se pretenden lograr con la sanción o medida. En caso que el adolescente no comprenda el idioma oficial (español) se deberá recurrir a un intérprete.

• Derecho a la confidencialidad y reserva. El adolescente deberá ser informado del hecho que todos los antecedentes privados que entregue están amparados por el derecho a la confidencialidad y reserva. Además, deberá ser informado de las consecuencias de liberar al funcionario respectivo de esta obligación. En caso de adolescentes que no entiendan el idioma español, la información deberá ser entregada a través de un intérprete.

• Deber de contar con identificación. Todo adolescente chileno o extranjero que no cuente con documento de identificación, deberá realizar los trámites para su obtención. La institución ejecutora de la sanción o medida deberá prestar todos los medios a su alcance para facilitar este trámite.

En relación a las políticas de protección en materia de educación, es posible reportar una serie de medidas vinculadas al Identificador Provisorio Escolar (IPE) implementadas a partir del aumento sostenido de estudiantes extranjeros en todos los niveles del sistema educativo, los cuales representan al 5 % de la matrícula total de estudiantes en 2020,

El IPE permite participar del Sistema de Admisión Escolar para de Ed. parvularia, básica y media, realizar inscripción en exámenes libres, realizar reconocimiento de estudios básicos y medios, realizados en el país de origen y para poder realizar inscripción a la Prueba de ingreso a la educación Universitaria, matricularse en un establecimiento y certificar los estudios básicos y medios realizados en Chile. Así mismo permite contar con los mismos derechos que los estudiantes nacionales respecto de la alimentación, textos escolares, seguro escolar y pase escolar para el transporte.

A consecuencia de la Ley de inclusión escolar n°20845, promulgada el año 2015, se establece entre otros la regulación a la admisión escolar a través de la creación del SAE – Sistema de Admisión Escolar, el cual ha generado regulaciones normativas a fin de garantizar medidas efectivas para promover la inclusión de estudiantes extranjeros en los establecimientos educacionales, con independencia de la condición migratoria de sus padres.

ORD N° 915 – 2018: Entrega instrucciones sobre la creación del Identificador Provisorio para Apoderado (IPA), garantizando con ello que aun cuando exista un apoderado sin run, los hijos no queden excluidos del proceso de postulación a un establecimiento educativo.

ORD N° 255 – 2019: Actualiza procedimientos de matrícula provisoria y proceso de validación de estudios. Clarificando que la matricula no está condicionada a los procesos requeridos para determinar el último año cursado en el extranjero.

ORD N° 898 – 2019: Clarifica proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar para estudiantes extranjeros sin RUN. Buscando el resguardo del derecho a educación aun cuando no se posea documentación.

Y ha introducido una serie de mejoras en los procesos para la incorporación de los estudiantes extranjeros a fin de prevenir cualquier tipo de discriminación:

-A partir del 2017 se reemplazó un sistema manual por un sistema digital para el ingreso de solicitudes de reconocimiento de estudios a través del sistema de registro CRM, que disminuyó, considerablemente los tiempos de respuesta al usuario final y también el resguardo de los documentos presentados, hacer seguimiento por sistema y un monitoreo de los casos para cumplir con los plazos comprometidos para cada solicitud.

-A partir del 2020 se pusieron a disposición de la ciudadanía la solicitud web de IPE/IPA que sirve para la postulación al Sistema de Admisión Escolar, así como para el proceso de regularización de estudios y matrícula de estudiantes extranjeros que no cuentan con un RUN nacional.

-A partir del 2020 se incorporó la opción de Inscripción a la PDT (Prueba de Transición a la educación superior) con el identificador provisorio escolar (IPE).

-Para los menores que no tienen como acreditar el último nivel cursado, o no pueden acogerse al trámite de reconocimiento de estudios y participan del Sistema de Admisión Escolar, a partir del 2020 se realiza posterior a la matricula, un proceso automatizado de identificación de estudiantes que se encuentran en esta situación y el proceso de validación culmina con el envío directo al establecimiento de las autorizaciones respectivas, haciendo más expedito el trámite y evitando que los estudiantes y sus familias tengan que solicitar la autorización en forma presencial en las oficinas de Ayuda Mineduc.

El año 2020 para el sistema de admisión escolar se entregaron más de 15 mil identificadores provisorios. Y en relación a los datos del total de estudiantes extranjeros al 2020, 47.852 son estudiantes que hoy tienen un IPE vigente que les permite ser parte del sistema educativo. En este mismo sentido, promoviendo la regularización migratoria a noviembre del 2020, 13.733 estudiantes registrados en SIGE hicieron el cambio de IPE a RUN.

Datos sobre NNA no acompañados por sus padres:

Al mes de marzo 2021, 30 niños, niñas y adolescentes migrantes que se encontraban viviendo en establecimientos residenciales se encontraban sin compañía de sus padres. Más de la mitad de estos NNA (19) se encuentran en el norte del país. En las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL NACIONAL** | **N° TOTAL DE NNA CON MEDIDA VIGENTE (ESPERA Y CUMPLIMIENTO) "P" Y "X"** | **TOTAL DE NNA MIGRANTES** | **TOTAL DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS/EN SITUACIÓN DE ABANDONO** | **TOTAL DE NNA MIGRANTES CON OB** |
| **RESIDENCIA** | 5.011 | 166 | 30 | 27 |
| **FAE** | 8.178 | 113 | 0 | 0 |
| **AMBULATORIO** | 108.025 | 2.498 | 1 | 3 |
| **TOTAL** | **121.214** | **2.777** | **31** | **30** |

Artículos 16 a 22

Párrafo 16). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales, que los hombres y las mujeres estén debidamente separados y que se presten servicios sociales básicos, como alimentación, atención de la salud y acceso a condiciones de higiene adecuadas, servicios de intérpretes, acceso a la justicia y todas las debidas garantías procesales teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres migrantes en situación de detención. Tengan a bien indicar también si:

Párrafo 16 letra d) Existen mecanismos de representación jurídica y de reparación a los trabajadores migratorios víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y si se cuenta con los recursos públicos apropiados;

Eventualmente, a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Sin embargo, no existe una entidad especializada en la representación jurídica y de reparación de trabajadores migratorios (y nacionales) víctimas de los delitos ahí referido. La Defensoría Penal Pública representa jurídicamente a todas las personas, incluidas los trabajadores migrantes, imputados, acusados y condenados por crímenes, simples delitos y faltas. Así mismo, cuando estas personas son víctimas de hechos constitutivos de torturas o malos tratos, la DPP insta por la protección de sus derechos, efectuando las denuncias penales y administrativas así como a través de la comunicación de esta situación a los organismos establecidos por ley para investigar y/o requerir la acción de la justicia (Ministerio Público o INDH). La DPP no tiene facultades legales para querellarse, reparar y/o adoptar otras medidas tendientes a la representación jurídica de las víctimas. Cuando los imputados/condenados representados por la DPP adquieren además la calidad de víctimas, la DPP insta por su debida protección en el marco de sus competencias a través de cautela de garantías, acciones de hábeas corpus, recursos de protección y requerimientos administrativos.

Artículos 27 a 30

Párrafo 21. Sírvanse informar sobre las medidas para asegurar la igualdad en el sistema previsional del Estado parte, en particular para asegurar que los trabajadores migrantes y sus familiares puedan disponer de sus fondos previsionales, independientemente de la edad de jubilación, una vez que han decidido no residir en el Estado parte, en concordancia con los convenios de seguridad social bilaterales y multilaterales firmados por el Estado parte.

La nueva ley migratoria, especialmente el artículo 16 inciso cuarto, señala que el Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales que garanticen el acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus países de origen, así como el artículo 133, que se refiere al derecho del extranjero a designar un mandatario que lo represente en la defensa de sus derechos laborales y previsionales, ante la imposición de una medida de expulsión del territorio nacional.

Durante el año 2020, se desarrolló un programa de trabajo en materia de Políticas Migratorias de la Dirección de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión social. En este contexto, se celebraron 5 charlas informativas dirigidas a población migrante u organismos representativos, que contemplaron un amplio abanico de temáticas. Las reuniones se celebraron virtualmente, en las siguientes fechas:

a. Tarapacá, 14.05.2020.

b. Metropolitana, 22.05.2020

c. Metropolitana, 29.05.2020

d. Metropolitana, 05.06.2020

e. Metropolitana, 19.06.2020

La actividad informativa realizada el 19 de junio contempló una temática particular que no había sido abordada por la Unidad de Educación Previsional en jornadas anteriores; “los convenios internacionales de Seguridad Social”. Por esta razón, se realizaron dos reuniones previas con profesionales de Asesoría Legislativa y de la Superintendencia de Pensiones, organismo encargado de los enlaces con instituciones de países con los que Chile posee convenios, para actualizar la información que sería presentada a INCAMI, organización sin fines de lucro que brinda asesorías y apoyo a personas migrantes en Chile.

Párrafo 24. Sírvanse proporcionar información acerca de:

**Párrafo 24 a) Programas para facilitar la enseñanza del idioma local a migrantes y la inclusión de niños migrantes en el sistema educativo, en particular de niños y niñas haitianos hijos de padres trabajadores migratorios, así como de hijos de padres de otras nacionalidades;**

El aumento de la migración en Chile en los últimos años ha aportado diversidad en muchos ámbitos a nuestro país. La sostenida incorporación de estudiantes no hispanohablantes al sistema escolar nacional pone de manifiesto un conjunto de necesidades educativas específicas no previstas en la normativa vigente. La presencia de estos nuevos estudiantes en los establecimientos escolares refleja la necesidad de apoyar a todos los actores de la comunidad escolar para adquirir competencias que promuevan su comunicación efectiva y faciliten el aprendizaje y la convivencia en diversidad lingüística cultural. En este contexto se han diseñado una serie de estrategias formativas para distintos actores de las comunidades educativas en la enseñanza del español como segunda lengua, las cuales se enfocan en la comprensión del aprendizaje de español no solo como un proceso lingüístico sino también sociocultural. Por otra, se centra en la adquisición de herramientas metodológicas que facilitan la enseñanza y la comunicación con estudiantes no hispanohablantes.

El Mineduc en busca de entregar recursos y formación didáctica específica para la enseñanza de español como segunda lengua (ELE), ha establecido desde el año 2018 una red de colaboración con el Área de Español para Extranjeros del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, con el propósito de favorecer la inclusión de estudiantes migrantes internacionales que no hablan ni escriben en español.

El objetivo de esta iniciativa consiste en orientar a diferentes actores de la comunidad escolar en la comprensión del proceso sociocultural de aprendizaje de una segunda lengua mediante la adquisición de herramientas metodológicas que facilitan el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Para dar cumplimiento a este propósito se realizó, una formación para monitores del programa de alfabetización pertenecientes al equipo de personas jóvenes y adultas junto al diseño de un material educativo para el aprendizaje del español en esa modalidad.

Por otro lado, el año 2020 se inicia una estrategia a nivel Ministerial para proveer de herramientas de comunicación intercultural a través de un curso de formación en diversidad lingüística y cultural para la comunicación con personas no hispanohablantes de 40 hrs sincrónicas para profesionales de las comunidades educativas y el desarrollo de una guía metodológica para la comunicación intercultural con personas no hispanohablantes. Este 2021 se realizará una segunda parte de profundización del curso de formación para docentes y se realizan las gestiones y adecuaciones de la propuesta para que pase a ser parte de la oferta formativa del Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Por otro lado, buscando disminuir la brecha idiomática esta vez en el acceso se establece que los formularios web de solicitud de IPE e IPA disponen su traducción en línea al Creole dentro de la plataforma de Ayuda Mineduc, además, existe un video tutorial traducido al creole disponible para los apoderados en el marco del SAE y se ha dispuesto la contratación de un funcionario en la oficina de Ayuda Mineduc de la Secreduc RM que hable creole, para atender a los usuarios que no hablan español provenientes de Haití.

1. **Medidas para asegurar cupos escolares suficientes en la región metropolitana para hijos de trabajadores migrantes;**

Con la finalidad de conocer la disponibilidad de vacantes de todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados que dictan educación regular a nivel nacional, y desagregados por región, comuna y nivel educativo, el Sistema de Admisión Escolar puso a disposición la página web vacantes.mineduc.cl, repositorio donde es posible consultar en línea la disponibilidad de vacantes por establecimiento.

Si bien es cierto que esta es una herramienta al servicio de la comunidad y para una mejor gestión, es evidente que, en algunas comunas, principalmente en las capitales regionales, las escuelas tienen menos disponibilidad de vacantes lo que es independiente de la nacionalidad de los estudiantes, dada la mayor demanda.

En este mismo sentido, el año 2019 se generó una modificación al reglamento del Sistema de Admisión Escolar que permite a los establecimientos generar sobrecupos o aumentos de capacidad cuando son altamente demandados por las familias, por lo que es una alternativa que existe para estos casos. El año 2019 más de 250 establecimientos solicitaron cupos adicionales al ministerio de Educación.

**Párrafo 4 c) Medidas para facilitar la inclusión efectiva a los niños migrantes en el ámbito educativo, tanto en términos de metodologías de aprendizajes, como en términos de buen trato y no discriminación, así como sobre la continuidad del programa por el derecho a la educación.**

A modo de ejemplo de la adopción de medidas para favorecer una efectiva inclusión educativa en términos de aprendizaje, resulta particularmente relevante visibilizar la inclusión de estudiantes extranjeros en Escuelas Especiales en donde se potencia la generación de procesos de flexibilidad pedagógica y curricular que contribuyen a experiencias de aprendizaje pertinentes y adecuadas a las condiciones de vida, de cada estudiante y su familia.

La Educación Especial en nuestro país recibe un importante número de estudiantes de nacionalidad extranjera, a nivel nacional son 2.615 niños, niñas y jóvenes que se encuentran matriculados en sus distintas modalidades. Las 5 nacionalidad con mayor prevalencia corresponden a países de Latinoamérica como Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, siendo únicamente estudiantes provenientes de Haití quienes no comparten la misma lengua.

Por otro lado, la distribución de esta población extranjera en la educación especial por nivel da cuenta de una gran concentración en la educación parvularia de esta modalidad. Un total de 2.198 (84%) de los 2.615 de niños y jóvenes corresponden a los niveles Medio Menor (644) y Transición (1.554). Finalmente, observando la distribución regional de la matrícula de estudiantes extranjeros, vemos que existe una concentración importante en las regiones del norte y el centro del país. Lo que coincide con las cifras que dan cuenta de la presencia de población extranjera en la población general de nuestro país.

Así también en términos de favorecer la inclusión están los programas que entrega la JUNAEB en igualdad de condiciones sin discriminación se encuentran los programas que entrega JUNAEB, ESPA, HPV, PSO y SSMM que focalizan su estrategia de acción en los establecimientos educacionales adscritos a estos programas, por tanto, todos los estudiantes matriculados en dichos establecimientos pueden acceder al programa sin la distinción de si son estudiantes chilenos o extranjeros.

Por su parte, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) considera dentro de la población potencial a beneficiar a los estudiantes de procedencia extranjera matriculados en establecimientos adscritos al PAE que cuenten con Identificador Provisorio Escolar (IPE) y/o identificados como extranjeros, es decir es un criterio de priorización. De todas formas, la asignación final de las raciones depende del establecimiento educacional quien administra tanto los ingresos a comedor como la entrega de las canastas, siendo la única restricción entregarlas a estudiantes matriculados.

Considerando la diversidad cultural presente en las comunidades educativas cabe destacar que actualmente, el Programa de Alimentación Escolar, cuenta con diversas estrategias para que los estudiantes consuman las preparaciones entregadas por el programa, ejemplo de ello mejoras en las preparaciones desarrolladas por el Laboratorio Gastronómico, Cocina con Raíces y Cocina del Mundo que de acuerdo a lo establecido en la nueva licitación deben ser entregadas en una frecuencia de 4 veces al mes. LA Cocina del Mundo, está enfocada en establecimientos/comunas que cuenten con un alto porcentaje de estudiantes migrantes, en estos establecimientos el prestador debe incluir en las minutas preparaciones específicas de otros países como ají de gallina, pabellón criollo y pollo atomatado, que son preparaciones típicas de Perú, Venezuela y Haití. Lo anterior, cumpliendo las exigencias de las estructuras alimentarias indicadas por JUNAEB. Con la incorporación de estos platos se espera, asimismo, educar a los estudiantes chilenos en las distintas costumbres de quienes llegan al país, generando un intercambio cultural entre ambos.

Por otro lado, el Programa de Útiles Escolares, entrega el beneficio a todos los estudiantes matriculados en los establecimientos con financiamiento público, indistintamente de su condición de nacionalidad. La Beca de Acceso Tic, en su modalidad de entrega a estudiantes de 7° básico de establecimientos con financiamiento público, el beneficio se asigna a todos los estudiantes del nivel matriculados en estos establecimientos independiente de su nacionalidad. En el caso de la TNE, los estudiantes migrantes pueden acceder a la tarjeta siempre que tengan la condición de estudiante regular, se acepta para la emisión de las tarjetas el IPE.

En la mayoría de los Programas excepto las becas, se ha optado por extender el beneficio a todos los estudiantes matriculados en los establecimientos que cuenten o estén adscritos a un determinado programa, de esta manera no se genera la exclusión del estudiante extranjero por no contar con rut. También, como en el caso del PAE, se utiliza el Identificador Provisorio Escolar (IPE) entregado por MINEDUC para incluir en la contabilización de la población potencial a los estudiantes extranjeros que no tienen rut y que podrían recibir el beneficio. El principal criterio de priorización para obtener un beneficio es tener la condición de estudiante.

Artículos 31 a 33

Párrafo 25. Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan derecho a transferir sus ganancias, ahorros, pensiones y, de conformidad con la legislación aplicable, sus pertenencias y efectos personales. Informen también sobre las medidas adoptadas para facilitar la transferencia de fondos privados, en particular para reducir el costo de esas operaciones (CMW/C/CHL/CO/1, párrs. 40 y 41).

Según lo establecido en la nueva ley de migraciones, especialmente el artículo 16 inciso cuarto, señala que el Estado promoverá la negociación de convenios bilaterales o multilaterales que garanticen el acceso igualitario a los derechos previsionales de los trabajadores migratorios y sus familias que regresen a sus países de origen, así como el artículo 133, que se refiere al derecho del extranjero a designar un mandatario que lo represente en la defensa de sus derechos laborales y previsionales, ante la imposición de una medida de expulsión del territorio nacional.

Además, establece en su artículo 20, que los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicables y en los acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Actualmente en Chile se encuentran vigentes 25 Convenios de Seguridad Social, además del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Estos Convenios otorgan una serie de facilidades para que los trabajadores migrantes puedan transferir sus pensiones a sus países de origen. Fundamentalmente, reducen el costo de las operaciones.

<https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/biblioteca/convenios-internacionales-de-seguridad-social/>

4. Parte IV de la Convención

**Artículo 40**

Párrafo 27. Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para garantizar a los trabajadores migratorios y a sus familiares el derecho a establecer asociaciones y sindicatos y a formar parte de sus órganos ejecutivos, de conformidad con el artículo 40 de la Convención y el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87), de la OIT, ratificado por el Estado parte.

Los trabajadores migrantes cuentan con los mismos derechos laborales, incluidos los derechos colectivos, no existiendo restricciones a su respecto para constituir sindicatos, pertenecer o desvincularse de una organización sindical.

Sobre el particular, es destacable que de los beneficiarios del Fondo de Formación Sindical establecido por la ley 20.940, que en el año 2019 sumaron un total de 2.668 trabajadores y trabajadoras, dirigentes y dirigentes sindicales, micros y pequeños empresarios(as) y trabajadores(as), comprendiendo todas las regiones del país, el 3,4% correspondió a extranjeros.

<http://www.dialogosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Informe-de-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-sobre-la-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-N20.940-abril-2020.pdf>

Artículos 43 a 45

Párrafo 28. En el marco del proyecto de ley de reforma migratoria y sus indicaciones, sírvanse informar sobre las medidas adoptadas respecto a las restricciones al empleo de trabajadores migrantes en empresas de más de 25 empleados en relación con los trabajadores migratorios con un permiso de trabajo válido por un período inferior a los cinco años, o únicamente a ciertas categorías laborales, funciones, servicios o actividades, cuando sea necesario en interés del Estado parte, de conformidad con el artículo 52 de la Convención (CMW/C/CHL/CO/1, párrs. 44 y 45).

La nueva ley de migraciones no contiene normas sobre el límite máximo de trabajadores extranjeros que pueden servir a un mismo empleador.

Párrafo 29. Por favor informen sobre los programas y las políticas dirigidos a facilitar la reunificación familiar de trabajadores migrantes hasta el 23 de abril de 2018, con su esposa o esposo o personas con quien el trabajador migrante tiene una relación que se equipara en sus efectos civiles al matrimonio, así como con sus hijos no casados y dependientes. Igualmente, sírvanse explicar al Comité la manera en que el Estado parte prevé facilitar la reunificación familiar de trabajadores migratorios de conformidad con el artículo 44 de la Convención, a partir del 23 de abril de 2018 en el contexto de la reforma migratoria y de extranjería.

Sobre este punto es posible informar que, en el párrafo II de la nueva ley de Migración y Extranjería se establecen los Derechos y Obligaciones de los extranjeros, se establece el principio de reunificación familiar. El artículo 19, señala que los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o con aquella persona que mantenga una relación que produzca efectos equivalentes al matrimonio, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia. Así también, la norma señala que las solicitudes de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con extranjeros residentes se tramitarán de manera prioritaria.

En ese sentido, es importante destacar que el concepto de familia que recoge esta norma es más amplio que el de la propia Convención, dado que incluye mayor cantidad de vínculos que habilitan al extranjero para solicitar reunificación.

Por otro lado, es importante señalar que la reunificación familiar es un principio que se recoge en varios aspectos de la nueva legislación migratoria, como por ejemplo lo relativo a la definición de las subcategorías de permanencia y residencia; en materia de nacionalización; en lo que respecta al cambio de categoría de permanencia transitoria a residente; e incluso en lo relativo a la aplicación de medidas como la expulsión administrativa.

La nueva normativa, realiza un importante con respecto a la actual legislación, ya que permite que aquellos extranjeros que hayan obtenido una residencia en condición de dependiente por reunificación familiar, puedan ejercer labores remuneradas.

Párrafo 30. Por favor informen sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la salud y a la vivienda en pie de igualdad con los nacionales del país. En particular, proporcionen información sobre:

**Párrafo 30** **a) Las medidas para combatir y sancionar la explotación en materia de alquileres y asegurar condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para trabajadores migrantes, así como medidas para evaluar la situación de trabajadores migratorios en lo que se refiere a la falta de hogar y facilitar el acceso a programas de subsidios de vivienda**

En lo que respecta a la nueva ley de migraciones, en su Título V, artículo 24 bis, referente al arriendo y subarriendo abusivo, y al hacinamiento, establece que la persona que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, será sancionada con multa a beneficio municipal.

La misma norma establece un procedimiento que comienza con la denuncia que puede realizar alguna de las autoridades allí señaladas o cualquier persona ante el juzgado de policía local, el que concluye con la imposición de una multa que, en el caso de existir aprovechamiento de la vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la misma, no podrá ser inferior al treinta por ciento de la multa máxima contemplada.

Por otra parte, dentro del párrafo que contiene las infracciones graves, la nueva normativa migratoria establece en su artículo 118 una multa al arrendador o subarrendador que, arriende o subarriende piezas o habitaciones a extranjeros sin dar cumplimiento a la carga de ocupación y demás exigencias y estándares que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Avances que ha tenido el MINVU:

* A nivel reglamentario, se eliminó barreras de acceso a subsidios habitacionales (subsidio sectores vulnerables, sectores medios y de arriendo) que afectaban a población extranjera:
* Modificación D.S. N°49: se elimina exigencia de certificar permanencia definitiva de 5 años en el país, solicitándose acreditar sólo permanencia definitiva. Vigente desde 20.03.2015; y se amplían alternativas para acreditación de permanencia definitiva de extranjeros (Certificado permanencia definitiva o Certificado vigencia Permanencia Definitiva entregado por la Policía Internacional de Investigaciones de Chile o acreditación en línea). Vigente desde 21.06.2017.
* Modificación D.S. N°01: se elimina exigencia de certificar permanencia definitiva de 5 años en el país, solicitándose acreditar sólo permanencia definitiva. Vigente desde 04.05.2015.
* Modificación D.S. N°52: el requisito de permanencia definitiva es reemplazado por la exigencia de cédula de identidad nacional para extranjeros. Vigente desde 16.12.2015.
* Se eliminó el límite de edad (30 años) en Programa Subsidio de Arriendo (DS N° 52), lo que ha permitido apoyar el acceso a vivienda adecuada a toda la población, Como a extranjeros residentes en Chile; a adultos mayores (llamados especiales, postulación sin núcleo familiar y renovación automática del subsidio); entre otros.
* Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios “Vivir Mejor “(D. S. 27. Vigente del 29 de julio de 2016. Establece la posibilidad de postular a los extranjeros con certificado de permanencia definitiva.
* Actualmente se está evaluando realizar modificaciones al subsidio de arriendo, programa que está orientado a abordar la demanda habitacional de diferentes grupos de la sociedad. Lo anterior, con la finalidad de ir dando respuesta a los desafíos emergentes.
* Se ha incorporado el enfoque de interculturalidad en el Procedimientos para la Prestación de Servicios de Asistencia Técnica, Jurídica y Social al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (Resolución Exenta N°1875, (V. y U.), 2015); y en Programa de Habitabilidad Rural (Resolución Exenta N°3131 (V. y U.), 2016), para generar procesos más pertinentes.
* El año 2018 Minvu estableció una estrategia de colaboración con el Programa de Reasentamiento de Familias Sirias (Departamento Extranjería, Ministerio del Interior), para dar acceso a viviendas adecuadas a las familias que son parte de esta iniciativa.
* Se han coordinado diversas instancias informativas dirigidas a población migrante, acompañadas de material informativo culturalmente pertinente. Por ejemplo, la elaboración de folletos en creole del Subsidio de Arriendo y del Sistema Integrado de Subsidio, entregados a población haitiana.
* MINVU, durante los años 2018 y 2019 realizó un catastro de campamentos, el cual permitió identificar que existen 802 campamentos y 47.050 hogares habitando en campamentos, de las cuales el 30% de los hogares tiene jefatura de hogar extranjera, las que en su mayoría son mujeres. En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta es mayor la proporción de jefatura de hogar de extranjeros que nacionales. Tomando en cuenta esta realidad, el Programa considera actualmente con un modelo de intervención que considera el enfoque intercultural.
* Otra medida que si bien no beneficiará exclusivamente a población extranjera, si abre opciones de soluciones habitacionales para este grupo, es la Glosa N°3 de la Ley de Presupuesto 2020, ya que a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, podrá otorgar subsidios de los Programas Habitacionales vigentes, destinados a financiar parcialmente a personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro que tengan por objeto construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas, las que serán destinadas en todos los casos al arrendamiento a familias que cumplan con los requisitos del Programa regulado por el D.S. N°52, (V. y U.), de 2013.
* En el contexto COVID-19 el MINVU durante el año 2020 realizó un llamado especial de Subsidio de Arriendo para personas que residen en comunas del Gran Santiago que presentan un alto índice de hacinamiento y una alta tasa de contagios por COVID-19, iniciativa destinada para nacionales y extranjeros. También realizó un trabajo coordinado con el sector público – privado para apoyar la entrega de un KIT de emergencia para las familias habitantes en campamentos (medida adoptada considerando familias nacionales y extranjeras).
* En atención a lo anterior, el MINVU está trabajando en la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones referida en el artículo 24 bis.

Sección II

**Párrafo 36.** **El Comité invita al Estado parte a que proporcione información (en no más de tres páginas) relativa a la protección de los trabajadores migratorios y de sus familiares con respecto a lo siguiente:**

**Párrafo 36 b) Las instituciones encargadas de aplicar las políticas en materia migratoria en la actualidad lo son, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría del Interior, el Departamento de Extranjería y Migración, las Gobernaciones Provinciales e Intendencias Regionales, principalmente, además de los Ministerios, en lo referente a políticas sectoriales que se relacionan con la materia.**

Por otro lado, la nueva ley de migraciones contempla una nueva institucionalidad migratoria, con la creación del Consejo de Política Migratoria, como ente asesor del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del país.

Este Consejo asesor, es multisectorial y será presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y estará integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud y el Ministro del Trabajo y Previsión Social. También lo integrarán sólo con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones municipales más representativas. Además, el presidente del Consejo podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros ministros; a funcionarios de la administración del estado o personas de reconocida competencia en el ámbito migratorio. El Consejo deberá sesionar cuando lo convoque su Presidente, con un mínimo de 2 veces al año.

Otro de los organismos que integran la institucionalidad migratoria, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que será la encargada de colaborar con el Presidente de la república en la formulación, implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia migratoria, con especial énfasis en la protección de los derechos de los extranjeros, entre otras funciones.

Por otro lado, la Subsecretaría del Interior, es el órgano de colaboración inmediata del Ministro del Interior y Seguridad Pública en todas aquellas materias relativas a la nueva ley y le corresponde ejercer una serie de atribuciones allí establecidas, tales como, la aprobación o rechazo de las solicitudes de refugio; expulsiones y prohibiciones de ingreso; regularizaciones migratorias; supervigilar al Servicio Nacional de Migraciones, a las autoridades de control y a todo otro órgano con competencias migratorias y velar porque éstos fiscalicen a los infractores de ley; disponer en casos excepcionales el otorgamiento de residencias temporales; coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la ley y su reglamento; y dictar las instrucciones para su correcta aplicación, previo informe del Servicio Nacional de Migraciones; determinar la condición de apátrida de los extranjeros, entre otras.

Dentro de la institucionalidad migratoria, se creó el Servicio Nacional de Migraciones, como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene dentro de sus principales funciones, la de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para su ejecución; recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país; autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de los extranjeros al país; resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, y su vigencia; declarar en caso de duda, si una persona es extranjera o no; establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros; aplicar las sanciones administrativas a los infractores de la ley; elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos y obligaciones de los extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Migratoria, entre otras.

Por otro lado, la nueva normativa, estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus representaciones consulares, tendrá dentro de sus funciones la de recibir y resolver las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria; resolver los permisos de residencia oficial; difundir las políticas migratorias del país; recibir y remitir al Servicio Nacional de Migraciones las solicitudes de residencia que presenten los extranjeros, entre otras. A diferencia de la actual ley, este Ministerio, ya no tendrá la atribución de resolver los permisos de residencia presentados fuera de Chile. Sólo es competente para resolver de manera provisoria el asilo político, cuando se solicita ante una representación diplomática.

Por último, contempló dentro de la institucionalidad migratoria a la autoridad policial de control migratorio, la que se encuentra radicada en la Policía y cuya función principal es controlar el ingreso y egreso de extranjeros al territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros y fiscalizar la legalidad de la estadía de extranjeros en el país, además de aplicar la medida provisional de prohibición de ingreso, cuando concurra alguna de las causales legales.

**Párrafo 36 c) Las políticas, los programas y los planes de acción relativos a cuestiones de migración, en particular a los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la manera en que tales políticas incluyen a los niños hijos de padres migrantes, así como su alcance y financiación;**

El Mineduc ha dispuesto la **Política nacional de estudiantes extranjeros** la cual tiene por objetivo garantizar el derecho a educación e inclusión de estudiantes extranjeros en el sistema educacional, contribuyendo a fortalecer la calidad educativa, respetando los principios de igualdad y no discriminación enmarcados en los compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile. En este documento se describe el conjunto de herramientas normativas e institucionales con que cuenta el sistema escolar para abordar el proceso de escolarización de los y las estudiantes extranjeros y contiene el sustento normativo nacional e internacional para la materia, recoge lineamientos desde distintos enfoques, hace un barrido de las iniciativas ministeriales anteriores vinculadas al tema y propone un marco estratégico institucional a partir de la organización de las acciones en tres áreas prioritarias: Articulación institucional e intersectorial, Fortalecimiento de la gestión educativa, Vinculación territorial para el diseño de política educativa.

Dado este contexto, este ha sido el instrumento dinamizador que articula la multiplicidad de tareas que implica la labor formativa e institucional en este contexto de transformación y diversidad cultural en el que Chile está inmerso. En este marco la primera acción clave fue impulsar una normativa interna que permita resguardar el derecho a educación, garantizando el pronto acceso al sistema educativo mediante el identificador provisorio escolar (IPE) y sus implicancias en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). A esta iniciativa la han sucedido una serie de otras acciones y programas que se señalan a continuación, varias de ellas como parte del Plan Nacional de DDHH.

* **Plan de apoyo a la inclusión** es un instrumento de gestión inspirado en la Ley N° 20845, y, comprende un conjunto de acciones que apunten a la construcción de comunidades educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes las integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades.

Para ello se han diseñado una serie de herramientas de apoyo para las comunidades educativas y todo el sistema escolar, con la finalidad de dar cuenta del enfoque de Inclusión y diversidad Cultural en contextos educativos y contribuir al fortalecimiento de la gestión educativa:

* Comunidades Educativas Inclusivas. Claves para la Acción. Este documento busca la articulación de políticas y contenidos que aporten a la convergencia de las distintas miradas en inclusión educativa que se tienen en nuestro país, haciéndose cargo de lo que establece la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar.
* Claves para reconocer la diversificación de la enseñanza en el sistema educativo. Una mirada panorámica, a la institucionalidad que se modifica y flexibiliza ciertas prácticas en relación con el fomento de comunidades educativas inclusivas, a través de tres ejes normativos, programáticos y de política pública.
* Herramientas para una educación más inclusiva. Hace un tránsito conceptual desde la integración hacia la inclusión, abriendo el concepto más allá de la importancia de considerar a estudiantes con condiciones particulares de discapacidad o necesidades educativas especiales, pues hablar de inclusión es atender todas y cada una de las diferencias que identifican a los integrantes de una comunidad educativa, contemplando la diversidad de condiciones de educabilidad. Este enfoque se materializa en tres principios orientadores de las acciones educativas inclusivas: Presencia, Reconocimiento y Pertinencia.
* Lo socioemocional desde el enfoque inclusivo e intercultural: desafío para las comunidades educativas en tiempos de crisis. Este documento se elabora con el fin de contribuir a enfrentar, tanto en términos presenciales como virtuales, aspectos emocionales y subjetivos con un enfoque inclusivo que permita abordar las consecuencias de la pandemia en los actores de las comunidades educativas.
* Todas estas publicaciones se encuentran disponible sen migrantes.mineduc.cl
* **Programa Biblioteca Migrante** es una estrategia pedagógica innovadora que desde las conversaciones literarias favorece la cercanía del docente con el mundo infanto-juvenil, convirtiéndose en una respuesta pedagógica que aporta tanto a la lectura como a la inclusión, donde la voz de los niños y niñas prima por sobre la del mundo adulto en materia de comprensión lectora.

El Programa se denomina Biblioteca Migrante para dar un guiño inclusivo dirigido a estudiantes extranjeros, pero principalmente adquiere este nombre ya que se espera que los libros estén en movimiento transiten o migren por los distintos cursos, especialmente entre 3º y 8º básico, para ser leídos, explorados, conversados, intervenidos, reinventados, analizados, discutidos y todo aquello que permita, desde una perspectiva pedagógica, construir aprendizajes colaborativos en un ambiente protegido para explorar las diferencias en relación con temas que resuenan con sus experiencias biográficas y motivan a expresar su entendimiento, desarrollar su identidad y participar en el intercambio intercultural.

Actualmente este programa entrega una colección de libros que permiten tratar en forma crítica la creación de categorías que diferencian, incitar conversaciones sobre identidad y trabajar críticamente las dinámicas de exclusión en contextos educativos. <https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/06/Bit%C3%A1cora-del-mediador.pdf>

**-Oferta formativa,** con relación a la oferta formativa del área de Formación Continua del CPEIP desde el año 2018, ha puesto gran énfasis en el desarrollo de cursos que responden a actividades declaradas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre estos cursos destacaremos 3 que abordan la temática de interés:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del curso | Descripción | Ejecución (Año) | N° Participantes | Monto Asociado |
| **La escuela en el Marco de los DD.HH** | Este curso es de carácter introductorio invita a las y los docentes de distintos niveles educativos y especialidades, así como a equipos directivos a mirar críticamente los entornos y procesos educativos desde un enfoque de Derechos Humanos, para que puedan integrar algunos criterios y orientaciones en la toma de decisiones y en las prácticas que se producen en sus propias comunidades educativas.  Tiene una duración de 120 horas en modalidad b-Learning.  Es apoyado en cada una de sus ejecuciones por el INDH. | 2018 | 205 | 38.420.000 |
| 2019 | 203 | 42.579.000 |
| 2020 | 150 | 29.580.000 |
| **Interculturalidad en el aula** | Los principales focos de profundización desarrollados por este curso tienen relación con identificar las principales herramientas y comprende las oportunidades de incorporar el enfoque intercultural en la escuela y en la práctica pedagógica. Como también, reflexionar críticamente sobre la práctica y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula que promuevan la diversidad y la interculturalidad.  Tiene una duración de 120 horas  Modalidad b-Learning. | 2019 | 351 | 81.853.000 |
| 2020 | 476 | 51.800.000 |
| 2021 | 100 | 11.500.000 |
| **Interculturalidad en aula: Inclusión de estudiantes Extranjeros** | Los principales focos de profundización desarrollados por este curso tienen relación con identificar las principales herramientas y comprende las oportunidades de incorporar el enfoque intercultural en la escuela y en la práctica pedagógica. Como también, reflexionar críticamente sobre la práctica y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula que promuevan la diversidad y la interculturalidad.  Tiene una duración de 60 horas.  Modalidad e-Learning | 2020 | 98 | 4.410.000 |

 Cabe destacar que estas acciones tendrán continuidad en la oferta formativa del área.

- **Estándares indicativos de desempeño para los Establecimientos educacionales y sus Sostenedores (EID)[[2]](#footnote-2),** los cuales fueron elaborados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y dictados mediante Decreto Supremo. Los Estándares Indicativos de Desempeño son un conjunto de referentes que constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. Estos se inscriben dentro de los requerimientos estipulados por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y fueron elaborados con el propósito de apoyar y orientar a los establecimientos en su proceso de mejora continua, y así contribuir a la meta que se ha propuesto el país de asegurar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes. En este documento se propone el estándar especifico (6.5): Incorporar un enfoque inclusivo e intercultural para asegurar el desarrollo de los estudiantes de distintas culturas. Para el tramo satisfactorio el estándar se señala:

* Realizar acciones para desarrollar las competencias interculturales en la comunidad educativa, tales como el respeto, la apertura hacia otras perspectivas, la empatía, la curiosidad y la tolerancia.
* Promover la acogida y permanencia de estudiantes extranjeros, de ascendencia indígena o de distintas culturas. Para esto, cuentan con protocolos de acogida que incluyen entrevistas a sus familias y apoderados, aplicación de evaluaciones diagnósticas académicas y de manejo de idioma, entre otras.
* Incorporar elementos de la diversidad cultural presente en el establecimiento en las actividades e iniciativas escolares. Por ejemplo, planifican actividades pedagógicas para valorar las lenguas habladas por los estudiantes y sus diferentes experiencias culturales, crean murales o exponen fotografías que ilustran el valor de cada cultura, gestionan talleres extracurriculares cuyo foco es aprender de otros países o pueblos, entre otros.
* Orientar el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales para la interculturalidad. Por ejemplo, implementan espacios de formación y autoformación docente, identifican y abordan estereotipos presentes en el establecimiento, entre otros.

**Párrafo 36** **e) Los estudios generales que se hayan realizado recientemente sobre la situación de los trabajadores migratorios y de sus familiares y sobre los nacionales chilenos que residen y trabajan en otros países;**

Se pueden señalar los siguientes estudios: “Gestión de la Migración en el Siglo XXI:El caso de Chile” autores: Alvaro Bellolio Avaria y Gonzalo Valdés Edwards.

El Ministerio de Educación a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en adelante CPEIP ha desarrollados diversas instancias de investigación y formación en lo que respecta a la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias que se describen a continuación:

Investigación y Difusión:

1. Implementación y cierre de una investigación acción participativa en conjunto con la UNESCO y 16 comunidades escolares de diversos contextos culturales y lingüísticos pertenecientes a cinco regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Araucanía), lo que permitió caracterizar buenas prácticas pedagógicas interculturales dirigidas a la población escolar indígena, afrodescendiente y migrante.

2. Sistematización y publicación de dos textos destinados a docentes que se desempeñen en aulas multiculturales denominados “Prácticas Pedagógicas Interculturales: reflexiones, experiencias y posibilidades desde el aula”, que contiene experiencias auténticas con ejemplos concretos sobre como planifican y evalúan adecuadamente la diversidad cultural y lingüística dentro del aula para no incurrir en múltiples discriminaciones.

https://www.cpeip.cl/cpeip-practicas-pedagogicas-interculturales-unesco/.

3. Desarrollo de material audiovisual destinado a difundir prácticas pedagógicas inclusivas libres de discriminación y sesgos, que orienta el modelamiento y reflexión de docentes de distintos contextos

1. Educando en la interculturalidad: <https://www.youtube.com/watch?v=91TefwjUjYI>

2. Una cultura inclusiva: <https://www.youtube.com/watch?v=igS8mx3fIRA>

3. Diversificación de la enseñanza: <https://www.youtube.com/watch?v=T8AnfnEPxIU&t=21s>

4. Equidad de género: <https://www.youtube.com/watch?v=IZrmuTHVCzM>

5. Mejorando la convivencia escolar: <https://www.youtube.com/watch?v=Xy_gcJnKAGc>

Por otra parte, el Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación, FONIDE, es un fondo concursable abierto a instituciones de Educación Superior y centros de investigación dedicados al estudio de temas relacionados con la educación. Este fondo ha permitido el desarrollo de importantes investigaciones en el ámbito de la educación. Desde el 2018 tiene entre sus líneas temáticas: Escuela y sistema escolar inclusivo, como uno de los focos prioritarios de investigación.

Desde la institucionalidad, y sus servicios asociados se han solicitado los siguientes estudios en la materia:

Superintendencia de educación: Migrantes, mi escuela, mi mundo (2017)

- Trayectorias de inclusión educativa en niños y niñas migrantes en las escuelas de la RM (2016)

Agencia de la Calidad: Estudio inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar. (2019)

Centro de estudios Mineduc, https://centroestudios.mineduc.cl/

- Apuntes n°7: Variación de la matrícula preliminar, septiembre, 2020

- Apuntes n°14: Resumen estadístico de la educación, 2020

- Documento de trabajo: Medición de la exclusión escolar en Chile, abril 2020

- Informe del sistema educacional con análisis de género, 2019

**Párrafo 36 f) Los mecanismos establecidos para facilitar el acceso a la información pública sobre cuestiones de migración y los derechos consagrados en la Convención.**

La página web del Departamento de Extranjería, simplifica y hace más didáctico el acceso a la información, la que contiene los distintos tipos de categorías migratorias con sus requisitos, además de estadísticas y noticias de interés, entre otros. Además, hay una constante actualización de información, ya sea mediante la página web y redes sociales[[3]](#footnote-3). Por otro lado, hay un estricto cumplimiento a la Ley 20.285[[4]](#footnote-4), tanto en los requerimientos de Transparencia Activa como los requerimientos de Transparencia Pasiva.

MINEDUC: página web[[5]](#footnote-5) que reúne información específica acerca de estudiantes extranjeros en el sistema educacional que se mantiene actualizada, y es un canal de vinculación con la sociedad civil en general.

INDH: cuenta en su página web con información sobre el derecho de acceso a la salud y la educación que cuentan los migrantes.

Actualizar con normas de la NLM sobre acceso a la información. Agregar otros mecanismos de acceso a información que disponga la población extranjera, como transparencia activa y pasiva.

Este párrafo puede complementarse con lo que establece el artículo 5 la NLM sobre derecho de acceso a la información por parte de los migrantes, y del deber que tiene el Estado de proveérselas, de forma íntegra, eficaz y oportuna acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país y cualquier otra información relevante, en idioma español, inglés y lenguaje de señas.

Además, la Política Nacional de Migración y Extranjería, deberá definir idiomas adicionales, atendiendo a los flujos migratorios, lo que se evaluará anualmente.

Por otro lado, el artículo 158, numeral 12, contempla dentro de las funciones del la Dirección Nacional de Migraciones, la de elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos y obligaciones de los extranjeros, los trámites necesarios para permanecer legalmente en el país y la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Así también, se puede hacer referencia a los demás mecanismos de acceso a la información de que dispone la población extranjera que se encuentre en el país, especialmente la ley N°20.285, sobre transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.

MINVU cuenta con una página Web que contiene información respecto a los requisitos de postulación, lugar donde se explicitan los requisitos que deben cumplir los extranjeros que desean postular a un subsidio habitacional.

También en la página del observatorio urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es posible encontrar la información estadística de caracterización de postulantes y beneficiarios de los programas habitacionales, incluyendo el dato de nacionales y extranjeros. Información disponible en: https://www.observatoriourbano.cl/

En materia laboral, han existido diversos esfuerzos e iniciativas al respecto, todas en función de promover los derechos laborales de los migrantes. Dentro de ellos destacan:

1. La Encuesta Laboral (ENCLA) 2019 incluyó un CAPÍTULO 4 sobre Presencia de trabajadores extranjeros en las empresas, en el cual se revisa la cobertura que tuvo la contratación de extranjeros en las empresas, según su tamaño y rama de actividad, así como la nacionalidad y sexo de estos trabajadores. Después, se describe los tipos de contratos y su distribución por nacionalidad, para luego conocer la opinión de los empleadores sobre los límites a la contratación de extranjeros que establece el Código del Trabajo. Por último, se indaga sobre la situación de las empresas y las motivaciones para contratar a extranjeros, así como su impacto en el clima laboral.

<https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-119454_recurso_1.pdf>

1. Publicación “Derechos Laborales para Migrantes”, editada en junio del 2019 por la Dirección del Trabajo, en español y creole. <https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-117019_recurso_1.pdf>

Por otra parte, cabe destacar la publicación N° 21 de la Revista Señales: “Niños migrantes en Chile y su situación de vulnerabilidad” , publicación especializada en infancia vulnerable e infractores de ley, que se encuentra a cargo de la Unidad de Estudios de SENAME. La publicación de la revista Señales fue incorporada -con fecha 25 de febrero-, a Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con lo cual Revista Señales alcanzó el estatus de revista científica indexada.

**Sección III**

Párrafo 37. f) Los servicios de asistencia jurídica prestados a los trabajadores migratorios y a sus familiares en el Estado parte y a los nacionales que trabajan en el extranjero o se encuentran en tránsito en un tercer Estado.

*Desde la creación de la DPP, el año 2001, y hasta el año 2020, han ingresado 100.118 causas de imputados extranjeros. Desde el año 2012 al 2020, a la DPP ingresaron 72.759 causas de personas migrantes imputadas por delitos. Este número se desglosa de la siguiente manera:*

*2012: 3.999 (1,1%)*

*2013: 4.985 (1,4%)*

*2014: 5.472 (1,6%)*

*2015: 6.611 (2,0%)*

*2016: 6.914 (2,1%)*

*2017: 8.257 (2,5%)*

*2018: 9.445 (3,0%)*

*2019: 13.293 (4,0%)*

*2020: 16.783 (4,6%)*

Párrafo 38. Sírvanse facilitar información adicional sobre las novedades importantes que se hayan registrado y sobre las medidas de aplicación de la Convención que el Estado parte considere prioritarias, incluyendo sobre si el Estado parte prevé formular las declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 de la Convención, que reconocen la competencia del Comité para recibir comunicaciones de los Estados partes y de personas.

En el marco de la representación de Chile ante el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (IIN-OEA) que detenta la Directora Nacional de SENAME, se ha coordinado la participación de profesionales en diversas actividades relacionadas con la atención de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes migrantes de la Red:

- Para reforzar el trabajo conjunto con los Estados Miembro, el IIN solicitó designar enlaces técnicos en distintas líneas temáticas que abarca el Plan de Acción del Instituto, una de esas líneas es la Promoción, protección y ejercicio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de movilidad Humana. Esta mesa cuenta con la participación de enlaces técnicos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Guatemala, Perú, Uruguay y profesionales del IIN-OEA

- Se desarrolló la edición 2020 del Curso virtual Especializado en Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Que el IIN desarrolla en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Respecto de este a SENAME le corresponde coordinar la participación de profesionales de diversas reparticiones del Estado de Chile, que trabajan en el área de la niñez, enviando 10 postulantes entre la Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez y SENAME.

Por otra parte, cabe destacar la suscripción de 3 convenios bilaterales respecto a la Protección y Retorno Seguro de Niños, Niñas y Adolescentes:

1) Perú: MINJUDDHH y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, de 26 de febrero de 2018.

2) Ecuador: Acuerdo entre el MINJUDDHH y la Secretaría de Derechos Humanos de la República del Ecuador, de 06 de junio de 2019.

3) República Dominicana: Acuerdo entre el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia de República Dominicana y SENAME, de 22 de julio de 2019.

Información adicional

1. **Equipo Agenda de Inclusión Social – MINVU**

A partir del año 2019 se constituye un equipo de la Agenda de Inclusión Social encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos definidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de acción de Niñez y Adolescencia y el Plan Igualdad entre hombres y mujeres.

El Objetivo de la Agenda de Inclusión Social es promover y articular medidas afirmativas y acciones orientadas a reducir inequidades, brechas y barreras que limitan la participación de los grupos de interés de la Agenda de Inclusión en los programas de Ciudad y Territorio, Vivienda Adecuada y Gestión Interna.

Los grupos de interés en los que se enfoca la Agenda de inclusión social son: las mujeres; los niños. niñas y adolescentes; los pueblos indígenas; las personas con discapacidad; los adultos mayores y las personas migrantes.

1. **Estadística de extranjeros beneficiados con un subsidio habitacional.**

A continuación, se reporta el número de beneficiarios por programa Habitacional desde los años 2014 al 2020:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | **Postulantes extranjeros beneficiadas** | | | | |
| **Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. 49** | **Subsidio Protección del Patrimonio Familiar  D.S. 255** | **Sistema Integrado de Subsidio  D.S. 1** | **Subsidio de Arriendo D.S 52** | **Total** |
| 2014 | 173 | 446 | 517 | 27 | 1.163 |
| 2015 | 358 | 438 | 862 | 57 | 1.715 |
| 2016 | 434 | 397 | 657 | 485 | 1.973 |
| 2017 | 540 | 527 | 878 | 463 | 2.408 |
| 2018 | 466 | 280 | 1.104 | 725 | 2.575 |
| 2019 | 840 | 278 | 1.141 | 1.001 | 3.260 |
| 2020 | 470 | 157 | 412 | 1.105 | 2.144 |
| **Total** | **3.281** | **2.523** | **5.571** | **3.863** | **15.238** |

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En materia migratoria, sin perjuicio de los avances que contiene la nueva ley de migraciones, ya señalados, es importante destacar, ciertas consideraciones que son relevantes para el cumplimiento de nuestro país de la Convención, y que no se han mencionados en el informe:

1.- Sus preceptos no sólo regulan materias relacionadas con los extranjeros, sino que además con el derecho a la vinculación y retorno de los chilenos residentes en el exterior.

2.- Establece la Nacionalización Calificada, que permite la obtención de la nacionalidad chilena en un plazo de 2 años de residencia continuada en el territorio nacional y no de 5 como es el requisito habitual, fundamentado en el principio de reunificación familiar.

3.- Establece un Título especial sobre chilenos en el exterior, que contempla: a) Los derechos de nuestros nacionales avecindados en el extranjero; b) la promoción del retorno; c) información consular; y d) el registro de chilenos en el exterior.

4.- Considera un título sobre el reconocimiento, convalidación y revalidación de títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero, permitiendo que otras universidades, además de la U. de Chile, puedan revalidar y convalidar títulos profesionales y técnicos y grados académicos, obtenidos en el extranjero, mediante un procedimiento reglamentado por el Ministerio de Educación.

Le otorga además al Mineduc, la facultad de efectuar reconocimientos, revalidaciones y convalidaciones por sí o a través de convenios con instituciones de educación superior.

5.- Le otorga al Director Nacional de Migraciones la facultad de rebajar el monto de los derechos a pagar por concepto de pagos de permisos de residencia, prórrogas, y autorizaciones de trabajo, en casos excepcionales, lo que no es posible de acuerdo a la actual legislación, siendo una herramienta muy valiosa para aquellos casos de inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

6.- Otra importante modificación que se incorpora con la actual legislación, y que va en directo beneficio de la población migrante, es lo relativo a la vigencia de la cédula de identidad, la que de conformidad con el artículo 43 inciso final, se entenderá vigente hasta que la autoridad migratoria resuelva su solicitud o el extranjero acredite que tiene una residencia en trámite. La incorporación de esta disposición, permitirá un mejor acceso de los migrantes a las distintas prestaciones sociales, y a la posibilidad de realizar todo tipo de trámites ante las distintas instituciones tanto públicas como privadas.

7.- El artículo 44 de la nueva ley, establece el denominada Rol Único Nacional, y señala que, toda institución estatal, institución u organismo previsional o de salud privado, o de establecimiento de educación público o privado, que requiera asignar un número identificatorio a un extranjero que solicite servicios propios del ejercicio de su función, deberá requerir al SRCeI que le asigne a esa persona un RUN, el que será válido para todos los efectos. En todo caso, tratándose de situaciones de urgencia, la asignación de este Run, no será obstáculo para otorgar la prestación requerida.

Esta norma, permitirá que aquellos extranjeros que no tienen cédula de identidad, no vean obstaculizado sus requerimientos ante los distintos organismos públicos, especialmente en materia de salud, educación, y previsional, por la falta del documento de identidad chileno.

8.- La nueva ley de Migración y Extranjería, a diferencia de la actual, incorporó las normas del debido proceso en materia de multas por infracción a la normativa migratoria, debiendo la autoridad notificar al extranjero personalmente, por carta certificada o por correo electrónico, si así lo solicitara, quien tendrá un plazo de 10 días para realizar sus descargos. La resolución que aplica la multa debe ser fundada y en contra de ella, se podrán interponer los recursos establecidos en la ley 19.880 y los recursos y acciones judiciales que procedan.

Cabe agregar además que, clasificó las infracciones migratorias en graves y menos graves, y la aplicación de sanciones de multas distintas, para cada infracción, fijando un monto específico, evitando que se cometa alguna arbitrariedad en su aplicación. Sólo establece la posibilidad de eximir, rebajar y aplicar el máximo de la multa, en los casos expresamente establecidos en ella.

Conclusión

El presente informe refiere la situación de los trabajadores migratorios y sus familias en Chile. El Estado lo elabora y presenta con el objeto de dar cuenta de su apoyo a la institucionalidad universal de derechos humanos, así como su compromiso irrestricto con los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su raza, etnia u origen.

1. Resolución Exenta núm. 10331 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 11.12.2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/14361/EID%20actualizacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [↑](#footnote-ref-2)
3. Instagram, Facebook, Twitter. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://migrantes.mineduc.cl/>. [↑](#footnote-ref-5)